

La Ciudad Futura

Revista de Cultura Socialista

Director Fundador: José Aricó (1931-1991). Directores: Juan Carlos Portantiero y Jorge Tula - ISSN 0328-221X - N°48, Buenos Aires, Primavera 1997 \$5

Concertación
chilena: génesis y
perspectivas
Carlos Ominami

Uruguay:
la izquierda a fin
de siglo
Jorge Lanzaro

Unidad en la
diversidad

Franco Castiglioni

La transición al
posmenemismo

Edgardo Mocca

El mundo del trabajo

Julio Godio

Liberalismo e
igualitarismo

Roberto Gargarella

Oficialismo y
oposición: fronteras
móviles

Emilio Tenti Fanfani

La política social

Elisa Carrió

Aliarse para educar

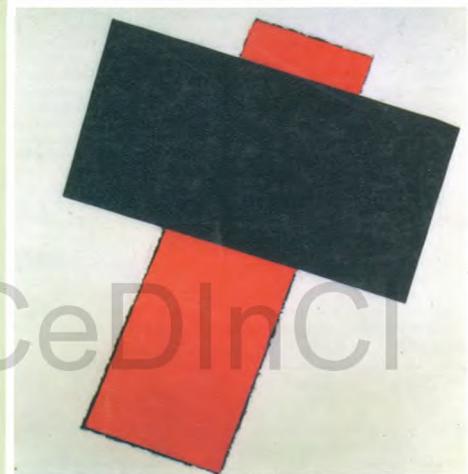
Adriana Puiggrós

Por un país normal

José Nun

Una política
democrática

Martin Plot



ELECCIONES
1997
ALIANZA

Documento

Definiciones económicas
de la coalición opositora

**Nueva relación
de la política con la sociedad**

Chacho Alvarez

Una empresa estratégica

Juan Carlos Portantiero

Para ampliar la Alianza

Este número se aparta un poco del sesgo característico de *La Ciudad Futura*, en tanto el género ensayístico deja esta vez su lugar a intervenciones de inmediato compromiso político, relacionadas con las elecciones del 26 de octubre y asumiendo, en ese marco, una definida posición de apoyo a la alianza sellada entre la UCR y el Frepaso, en una edición que cuenta con el invalorable aporte de protagonistas del acuerdo y de otros buenos amigos, de la Argentina, Chile y Uruguay.

Podría resultar innecesario un justificativo, pues es bien conocido el insistente compromiso de *La Ciudad Futura* con la búsqueda de la confluencia de las principales fuerzas de la oposición, como eje del polo de agregación democrática que pueda llevar a cabo las grandes transformaciones económicas, sociales y culturales que necesita nuestra sociedad. Pero no me parece que éste sea momento de sobrentendidos. Sin duda este número es un acto de coherencia con nuestra línea de ideas, pero creo que la razón de fondo de su aparición es, precisamente, la voluntad de testimoniar de manera inequívoca el compromiso político con esa línea de ideas y, fundamentalmente, con la expresión partidaria que hoy la encarna.

Desde mi punto de vista, además, ese compromiso está revestido de un extraordinario clima de entusiasmo y esperanza. Porque la Alianza no sólo aparece como la herramienta capaz de infligir una derrota histórica al oficialismo en estas elecciones, sino que, primordialmente, se dibuja como aquella pieza estratégica de transformación progresista. La Alianza

es, así, un acontecimiento político fenomenal, con potencia como para poner en marcha — más que adhesiones enfáticas, que en nada molestan, por cierto — fuertes y meditados compromisos de largo alcance. Como en el comienzo de una etapa que puede ser decisiva para todos.

Acaso lo más difícil, y que hasta hace poco parecía imposible, como es el acuerdo UCR-Frepaso, es lo que puso en marcha esa idea de futuro. Pero también queda mucho por avanzar, aun en las fases preliminares de este proceso: en lo programático, en definiciones políticas, en el discurso común, en el plano organizativo y en tantos otros de similar entidad. Aunque lo más importante habrá de situarse en la construcción de una "cultura de alianza", cualitativamente distinta de la actual de "partidos en la alianza", y superior a ella. Porque será la que permita involucrar en ese impulso político no sólo a los integrantes de aquellos partidos, sino a organizaciones, grupos e individuos que no adhieren ni a uno ni a otro, sino a la Alianza, a su proyecto más englobador y ambicioso. Es preciso que, sin perjuicio de que cada fuerza política conserve su identidad y, aun, su lógica de crecimiento individual, se abra el espacio para otras tradiciones, otras lógicas, otras lealtades, otros entusiasmos, otras aspiraciones, otros compromisos. Es una tarea pendiente. Y no sería bueno demorarla por falta de sensibilidad frente a una avidez de participación que oxigena el paisaje político.

Oswaldo Pedrosa

Sumario

Chacho Alvarez, Nueva relación de la política con la sociedad	3	fronteras móviles	15
Socialistas con la Alianza	4	Elisa Carrió, La política social de la Alianza	16
Juan Carlos Portantiero, La Alianza: una empresa estratégica	5	Adriana Puiggrós, Aliarse para educar	19
Franco Castiglioni, Unidad en la diversidad	7	José Nun, Por un país normal	21
Edgardo Mocca, La transición al posmenemismo	9	Definiciones económicas de la coalición opositora	23
Julio Godio, El mundo del trabajo	11	Carlos Ominami P., Concertación chilena: génesis y perspectivas	25
Roberto Gargarella, Liberalismo e igualitarismo	13	Jorge Lanzaro, Uruguay: la izquierda a fin de siglo	27
Emilio Tenti Fanfani, Oficialismo y oposición:		Martín Plot, Una política democrática	32

El artista: Kasimir Malevich (1878-1935), personaje central de la vanguardia rusa, disparador de encendidas polémicas.

La Ciudad Futura, Registro de la Propiedad Intelectual N°192675. BnE/Mitre 2094 - 1° (1039) Buenos Aires, Argentina - 953-1581.
Director fundador: José Aricó (1931-1991). **Directores:** Juan Carlos Portantiero y Jorge Tula. **Consejo de redacción:** Gerardo Adrogué, Javier Arriegas, Alejandro Blanco, Fabián Bosoer, Sergio Bufano, Franco Castiglioni, Sebastián Etchemendy, Hugo Farussi, Javier Franzé, Julián Gadano, Miguel Ángel García, Julio Godio, Marcelo Leiras, Antonio Marimón, Ricardo Mazzorin, Edgardo Mocca, Guillermo Ortiz, Oswaldo Pedrosa, Martín Plot, Ernesto Semán, Pablo Semán, Lucrécia Teixidó. **Comité asesor:** Emilio de Ipoia, Jorge Dotti, Rafael Filippelli, Oscar R. González, Jorge Kors, Carlos Kreimer, Marcelo Losada, Ricardo Nudelman, Oscar Terán.

Maqueta original: Juan Pablo Renzi. **Diagramación y armado:** Viviana Mozzi. **Asistente:** Patricia Cibeira.
La Ciudad Futura recibe toda su correspondencia, cheques y giros en Casilla de Correo N° 167, Sucursal 12, (1412) Buenos Aires. **Impresión:** Gráfica Integral, José Bonifacio 257, (1424) Buenos Aires. **Distribución** en otros países: Fernando García Cambreiro, box 014, Skyway, USA, 7331, N.W., 35th St., Miami, Florida 33122; oficinas: Cochabamba 244, (1150) Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 361-0473/93.
Suscripción anual: Argentina, US\$ 40.- Exterior, US\$ 60.- Bibliotecas e instituciones, US\$ 80.- **Cheques y giros** a la orden de Arnaldo Martín Jáuregui.

Nueva relación de la política con la sociedad

En pocas semanas de vida, la Alianza ha trastocado la escena política argentina. La sensación de resignación frente a lo que parecía un triunfo inevitable del oficialismo y a la perspectiva de un proceso de lucha por la sucesión en el interior mismo del gobierno ha dejado paso a la posibilidad del triunfo de una nueva coalición política.

Chacho Alvarez

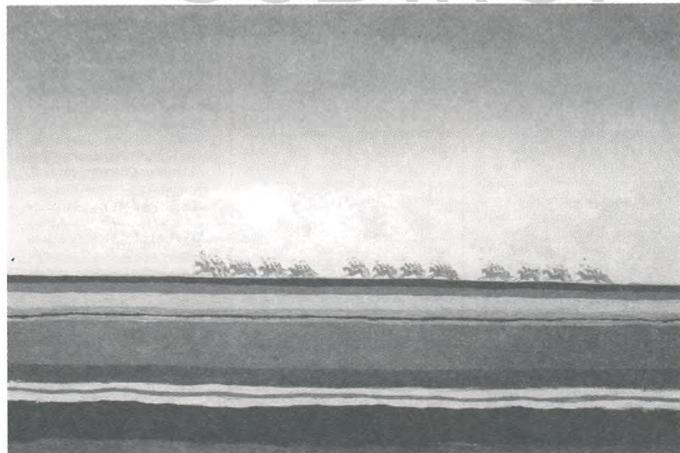
El solo hecho de la incertidumbre respecto del resultado electoral es un dato de mucho interés político. La posibilidad real de la alternancia en las mayorías electora-

les y en el gobierno es un elemento constitutivo de las democracias modernas. Sin este requisito, los largos predominios de una fracción política —mucho más si ésta tiene visibles apetitos hegemónicos, como es el caso del menem-duhaldismo— tiene efectos muy dañinos para la vida de las instituciones. Sobreviene la sensación de impunidad y el consecuente deterioro ético de la función pública; florece la confusión entre Estado y partido de gobierno, que empobrece la política y clausura el necesario debate plural. De manera que el solo hecho de que la mayoría y el gobierno puedan cambiar oxigena a la democracia.

A esto hay que agregar lo característico de la realidad política argentina. El ciclo menemista significó el auge de una cultura sumamente perniciosa para la convivencia social. Fueron los años del culto del éxito

fácil, de la sujeción de todos los valores a la lógica del mercado, de la frivolidad y de la manipulación institucional. Virtualmente, la mayoría política se sintió dueña del país. Los Pico, Samid, Yabrán, Fassi Lavalle fueron símbolos de una nueva clase que creció a la sombra de la hegemonía menemista en todos estos años. La libertad de mercado fue interpretada por este clan como la libertad de los negociados, las coimas y las mafias.

Con el nacimiento de la Alianza hemos pasado del hastío por tanto abuso y tanta insensibilidad a una instancia nueva: la agonia del ciclo menemista, el principio del fin de una manera de concebir el gobierno y de gestionar el poder. No podía comenzar la cuenta regresiva del hegemonismo neocconservador mientras una oposición fragmentada e impotente no presentara a la sociedad la



posibilidad cierta de algo nuevo.

La Alianza es, entonces, la respuesta de la política a un reclamo social que ya se hacía ostensible. Eso no resta méritos a la decisión de la UCR y el Frepaso de abrirle paso. Al contrario: no fueron pocas las situaciones en las que las demandas políticas de la sociedad encontraron a partidos y dirigentes encerrados en prácticas sectarias y autorreferenciales. Es posible pensar al surgimiento de la Alianza como el comienzo de una nueva relación de la política con la sociedad; como la recuperación para la política de su apatía para captar las demandas, articularlas y convertirlas en acción política.

Con esta perspectiva, la de la recuperación de la política después de años en las que para muchos fue un sinónimo de delito, la Alianza es mucho más que un giro táctico de corto alcance. Sería imperdonable que una decisión tan compleja y al mismo tiempo tan trascendente se agotara en el solo objetivo de derrotar electoralmente al menemismo en las elecciones legislativas. Es grande la responsabilidad de los partidos y dirigentes que la impulsan en cuanto a asegurar su permanencia y crecimiento como ámbito para pensar y trabajar por un nuevo proyecto de país.

El gobierno fracasó en su intento por retrotraer el debate hacia el pasado. La agitación del fantasma de la crisis hiperinflacionaria y el de la violencia supuestamente estimulada por la Alianza en los recientes conflictos sociales solamente despertó indiferencia o repudio. Surge con claridad que no tienen nada para ofrecer hacia el futuro. No tienen propuestas para la poblada agenda de nuevas demandas de la sociedad argentina. Pasan de la ignorancia más absoluta del reclamo docente expresado en la carpa a una promesa inédita de aumento salarial, luego desmentida por la fría lógica "de caja" del ministro de Economía. Montan un lamentable escenario publicitario para presentar un aumento a las remuneraciones de los jubilados de la

cuales se beneficiará solamente una pequeña parte.

El operativo "maquillaje" fracasó porque el país está intuyendo que no alcanza con cambios superficiales y exteriores. Aparece evidente que la reparación social de los perjudicados por los cambios, la concentración de esfuerzos en la rejerarquización material y simbólica de los maestros y la recuperación de nuestras instituciones no pueden ser confiadas a los mismos que administraron este proceso de exclusión y vaciamiento de la esfera pública.

La Alianza puede y debe expresar la necesidad de volver a pensarnos como una nación para todos, con igualdad de oportunidades, eficiencia y sentido del deber y de la ley. Debe marcar el tránsito desde el país de los mesianismos al de las instituciones sólidas y creíbles. Ser un país moderno hoy, un país normal y confiable, es tener una Justicia independiente, un Parlamento confiable que deje de ser un apéndice del Poder Ejecutivo. Significa pensar la globalización como una oportunidad para afirmarnos con nuestra propia personalidad nacional y no como una condena a reducirnos a la condición de factoría sin identidad cultural, fragmentada socialmente y dominada por una minoría de inescrupulosos.

Las elecciones están cerca y no caben especulaciones sobre sus resultados. Pero sí se puede decir que la noche del 26 de octubre no volveremos a mirarnos perplejos para preguntarnos por qué gana el menemismo a pesar de todo. Es muy probable que esa noche tengamos que encontramos para pensar juntos cómo sigue este nuevo capítulo de la política argentina que abrió la Alianza. Y estamos convencidos de que sigue con la construcción de una alternativa de gobierno para 1999. Ningún razonamiento mezquino deberá entorpecer esta nueva etapa que se abre. La perspectiva de una Argentina democrática, moderna, justa y solidaria debe superar todo cálculo secundario. Una vez más habrá que saber escuchar y responder el reclamo de la gente.

Socialistas con la Alianza*

Los firmantes, miembros del Club de Cultura Socialista José Aricó, saludan calurosamente el acuerdo celebrado entre la UCR y el Frepaso. Esta coalición, que consagra una sentida aspiración del progreso argentino y por la cual nuestra institución ha trabajado intensamente, crea las condiciones para la formación de un bloque de avanzada social, política y cultural, capaz de llevar a cabo las transformaciones que nuestra sociedad reclama.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1997.

Alberto Díaz, Ricardo Mazzorin, Alicia Azubel, Hilda Sabato, Guillermina Tiramonti, Ruth Andraza, Emilio de Ipola, Juan Carlos Portantiero, Julián Gadano, Franco Castiglioni, Jorge Tula, Abraham Kozak, Sergio Bufano, Lucrecia Teixidó, María Inés Silberberg, Carlos Altamirano, Oscar Terán, Ana María Kaufman, María Ester Rapalo, Jorge Kors, Arnaldo Jáuregui, Marcela Jáuregui, Carlos Kreimer, Ana Feldman, Claudia Hill, Ada Korn, Ester González Varona, Isidoro Cheresky, Jonas E. Bragunsky, Victoria Itzcovitz, Jorge Bragunsky, Margarita Roulet, Julio Godio, Arturo Sayus, María Caledari, Martín Plot, María Teresa Gramuglio, María Teresa Poyrazian, Miriam Trumper, Nannina Rivarola, Hugo Rappoport, Rubén Lauría, Susana Zanetti, Cristina Navarro, Juan José Saer, Edgardo Mocca, Marta Laferrerie, Néstor Bolomo, Pedro Krottsch, Osvaldo Pedrosa (siguen firmas)

* Solicitada publicada en el diario *Página 12*.

La Alianza: una empresa estratégica

Súbitamente, el opresivo clima político que vivía el país en vísperas de las elecciones legislativas cambió y la ciudadanía se favoreció como con una brisa de aire fresco con la constitución de la Alianza entre la UCR y el Frepaso.

Juan Carlos Portantiero

Hasta ese momento nada parecía quebrar la probabilidad de una nueva victoria del menemismo, aun cuando crecieran en la sociedad las muestras de disgusto por sus políticas. Pero, otra vez, la división de la oposición, pese a los intentos nacidos en El Molino, continuados luego con algunas movilizaciones colectivas conjuntas y con la constitución del Foro Multisectorial, favorecía la posibilidad de que el justicialismo volviera a ser el triunfador en las urnas.

En muchos números de *La Ciudad Futura* y desde diversos ángulos, condenamos la actitud incomprensible de los dos principales partidos opositores que parecían ciegos y sortidos frente a un reclamo cada vez más imperioso de grandes sectores ciudadanos. Afortunadamente en pocas horas la historia tuvo un vuelco y un acuerdo cupular abrió las primeras posibilidades de construcción de la coalición.

Desde entonces la escena comenzó a ser dominada por esa nueva realidad. La Alianza se concretó en catorce distritos, las primeras encuestas de opinión mostraron lo exitoso y oportuno del acuerdo, los espectaculares resultados de Chaco, Santiago del Estero, La Banda y Cutral-Có confirmaron la verosimilitud de esa expectativa y el menem-duhalidismo reveló, a través de lo creciente de su ofuscación, que había recibido el impacto.

Se pusieron en marcha, entonces, todos los mecanismos de provocación

de que dispone el arsenal de las campañas sucias. Ni siquiera la eventualidad de un fraude puntual durante el acto comicial o en el escrutinio podría ser descartada. Es que estas elecciones de octubre tienen valores distintos para las dos coaliciones enfrentadas: para la alianza conservadora populista -a que aquí y en el mundo está en el camino de salida- una derrota aunque por mínimo margen resultaría letal, porque le resultaría difícil encontrar un espacio propio de crecimiento. Para la flamante (y todavía incompleta) alianza progresista un empate técnico o la pérdida por escasos números (aunque no es esto lo que en el país marcan las encuestas si se suman todos los distritos, como políticamente corresponde) abriría todavía grandes posibilidades para la renovación presidencial del 99, por que su capacidad expansiva está lejos de estar agotada.

Esto es importante señalarlo porque los comicios de este mes son sólo una batalla táctica dentro de una estrategia de largo plazo, una escala, una estación dentro de un recorrido cuyo horizonte es el de impedir que el menemismo se suceda a sí mismo y para poder diseñar, en cambio, un tipo de sociedad diferente.

Partimos de la base de que las elecciones serán muy reñidas. Y que se darán en dos espacios de confrontación: el conjunto del país y, por el papel central de Duhalde en la política nacional, en la provincia de Buenos Aires. Los efectos más probables parecen ser: 1) que la Alianza gane en uno como en otro; 2) que el gobierno pierda en el país y gane, por poco margen, en la provincia de Buenos Aires. La tercera alternativa, el triunfo del justicialismo en la provincia y el país resulta menos evidente.

Colocada la ciudadanía en la carrera hacia 1999, cada una de estas opciones remite a escenarios diferentes, todos complejos. Si el menem-duhalidismo es derrotado, las pujas en el oficialismo pueden llegar a ser fero-

ces, con un Duhalde desplazado y un Menem deslegitimado, aunque el justicialismo conserve aún la mayoría de representantes en ambas cámaras (en el Senado la mantendrá por años). Para la Alianza la oportunidad del triunfo en el 99 se verá enormemente fortalecida, con todos los desafíos que ello implica.

En cambio, si el PJ pierde y Duhalde gana, éste ocupará el centro de la escena, arrinconando a Menem quien, seguramente, con las fuerzas que le quedan intentará contrarrestar para reducir los espacios, temeroso de que esto signifique el fin de su carrera política. Para la Alianza la posibilidad de triunfo en el 99 no se frustrará pero los desafíos serán aun mayores.

¿Cuáles son esos desafíos en una y otra situación? Genéricamente, de dos tipos: organizativos y programáticos, ambos encuadrados en la dificultad de cambiar una cultura de oposición por otra de gobierno.

Organizativamente la Alianza -reclama- es todavía débil pese a la muy buena acogida que ha tenido en las expectativas ciudadanas. En primer lugar no ha sido todavía capaz de agrupar la totalidad de sus propias fuerzas naturales, como lo muestran las actitudes mezquinas de los gobernadores radicales de Córdoba y Chubut, entre otros, y las resonancias desconfidadas de muchos militantes y cuadros medios de ambas fuerzas, absolutamente impávidos en su sectarismo ante el entusiasmo que la iniciativa aliancista ha generado en enormes contingentes de hombres del común que han recuperado la esperanza en la capacidad de cambio que puede traer la política.

Este tema del reagrupamiento de las propias fuerzas es un punto delicado, pero la consolidación de la Alianza exige un esfuerzo de proyección política aun mayor: en primer lugar, sobre el peronismo desencantado frente al giro neoliberal y corrupto del menem-duhalidismo. Pero no deberá tratarse solamente de un crecimiento

forjado sobre identidades políticas, para proceder a una sumatoria de fuerzas preexistentes o de gajos de ellas. La Alianza en sí misma debe transformarse en un referente, en una carta de identidad para la enorme falange de ciudadanos independientes que no son ni radicales, ni frepistas ni están comprometidos con ninguna organización. Construir la personalidad propia de la Alianza, no como yuxtaposición sino como síntesis y otorgar canales organizativos para esas voluntades, es una tarea pendiente de enorme trascendencia. Se trata de articular en un solo haz a la oposición social, a la oposición cultural y a la oposición política, en el marco de un programa de reformas.

Y en este terreno se plantea la otra

dimensión del desafío que habrá que apurar desde el 26 de octubre en adelante. Se trata de la relación entre continuidad y cambio en relación a la Argentina de hoy que la Alianza debe procesar. En otras palabras: ¿cuáles temas que vienen del menemismo deben mantenerse, cuáles mejorarse, cuáles cambiarse? El problema no es simple porque alude tanto a la gobernabilidad del sistema que la Alianza debe garantizar como a sus propias chances electorales.

La insistencia del menemismo de colocar el centro de la discusión en la ajetreada cuestión de la defensa o del ataque en relación con "el modelo" es una trampa que debería ser esquivada y que de hecho se lo está haciendo. Está claro que la sociedad valora como

un bien público a la estabilidad macroeconómica y a los instrumentos que puedan garantizarla: nadie en su sano juicio quiere el retorno de la inflación como tampoco el del autoritarismo. Pero ¿es eso "el modelo"? ¿Una suma de instrumentos económicos? Cuando hablamos de modelo debemos hablar de tipo de sociedad y su diseño no se agota en algunas medidas de política económica. Un modelo de sociedad va más allá: incluye una macroeconomía ordenada, en los marcos de un proceso de globalización que aparece como un dato, pero también un marco institucional que asegure entre otras cosas, la Justicia, la división de poderes, el combate a la corrupción y una mirada más equitativa sobre los costos sociales de las transformacio-

nes estructurales. Incluye aspectos económicos, pero también políticos, jurídicos, culturales y sociales. Queda claro que no aplican el mismo "modelo" el Olivo que Berlusconi en Italia, Jospin que Chirac en Francia, Blair que Thatcher en Inglaterra, o, más cerca de nosotros, la Concertación chilena y Pinochet, aunque en todos los casos se mantengan la apertura económica, los equilibrios fiscales y la preocupación ante cualquier brote inflacionario. La extorsión con que el gobierno busca someter a los candidatos de la Alianza para obligarlos a reconocer, dando examen diariamente, que acepten "el modelo" ya que si no lo hacen llevarán el país al caos, aunque poco efectiva ya, resulta inaceptable, en el mismo momento en que la mujer del gobernador Duhalde y hasta él mismo se permiten criticar aspectos de la política económica del gobierno.

Pero más allá de todo, una gran esperanza se ha instalado en el país. Es posible hoy comenzar firmemente a recrear y a profundizar, ampliándola en números y contenidos, como coalición explícita a la coalición sociocultural implícita que se forjara en 1983. Pero ya no se trata de la construcción de la forma más moderna y articulada de la política en una sociedad pluralista: una gran coalición progresista, un gran movimiento político y social de reformas. El primer peaje se encuentra a pocos días de marcha.

Pero el camino continúa.

Unidad en la diversidad*

La formación de la Alianza constituye una extraordinaria novedad en la política argentina. Hay múltiples razones para creerlo.

Franco Castiglioni

En primer lugar los principales dirigentes de las dos fuerzas de oposición han sabido hacer de necesidad virtud, admitiendo que sólo una alianza puede superar, en las condiciones políticas argentinas, las propias debilidades ante un adversario más poderoso, capaz de dominar el sistema político concentrando en sí mismo funciones de gobierno y oposición. La Alianza, por la fuerza que ha puesto en marcha, representa un desafío al patrón **movimentista** del justicialismo. Y al mismo tiempo, por su potencialidad alternativa, amenaza con llevar, por primera vez en la historia, al Partido Justicialista del gobierno a la oposición a través de las urnas. Lo cual, como sabemos, constituiría una prueba de alternancia política que la democracia argentina aún no ha experimentado.

En segundo lugar, los dirigentes aliancistas han demostrado, después de haber abonado el terreno de la confluencia sumando energías en ámbitos multisectoriales y en acciones conjuntas de protesta, que un acuerdo electoral puede ser intentado a pesar de las distintas tradiciones politico-culturales de sus participantes, de las legítimas aspiraciones a mantener o constituir las respectivas identidades políticas y de las posiciones de internas y negociaciones partidarias. También han probado que la **voluntad** política (en términos de "racionalidad" y de "razonabilidad", como sostiene Rawls) de conformar una alianza puede superar la ausencia de incentivos institucionales del sistema de representación proporcional

y lista bloqueada para constituir coaliciones. Vale recordar, a este propósito, que los recurrentes ejemplos extranjeros de constitución de frentes pluripartidistas en elecciones legislativas aparece asociada a sistemas electorales que incentivan la formación de polos o alianzas contrapuestas. En otras palabras, presentar listas comunes es una fórmula desusada pero la Alianza ha demostrado que en pocas semanas es posible rediseñar, a pesar de resistencias y bloqueos, equilibrios internos territoriales aparentemente intocables. Cabría a este respecto desarrollar un análisis en profundidad, distrito por distrito, que nos ayude a saber las lógicas que han movido a facilitar o a entorpecer el armado de la convergencia. Tal ejercicio sería importante desde un punto de vista analítico -por ejemplo, qué peso tuvieron los sondeos de opinión, dónde influyó la resistencia a ceder puestos o existió un rechazo *tout court* a la Alianza- para ofrecer insumos operativos con los cuales pensar la convergencia en vistas a su proyección política futura.

En tercer lugar, la formación de la Alianza abre la posibilidad de provocar una rearticulación en el sistema partidario argentino. Por un lado el Partido Justicialista, con sus aliados menores, y por el otro la Alianza UCR-Frepaso, en un esquema de alternancia bipolar y ya no bipartidista. Este esquema modifica la lógica de competencia, tanto frente a las elecciones legislativas como a las elecciones presidenciales, en las cuales la oposición enfrentaría unida el primer turno.

Por último, la constitución de la Alianza implica para sus actores principales, que adscriben en sentido lato al universo político y cultural del republicano y del progresismo económico, social y civil, delinear en la acción política sus contenidos, su alcance y sus límites, cuando se enfrenta la posibilidad de acceder al gobierno en un país profundamente

transformado luego de la década del menemismo. En otras palabras, la posibilidad de gobernar en el siglo XXI implica una innovación en la economía, en la salud, en la educación, en el Poder Judicial que obliga a realizar acuerdos estables y amplios en los que conviven las instancias progresistas con los condicionamientos que provienen del contexto económico global y de las diversidades culturales de la sociedad.

No pretendemos en estas líneas desarrollar punto por punto las novedades recién esbozadas. Sí queremos brevemente mencionar otros aspectos que consideramos relevantes para la Alianza. En la Argentina sería por lo menos audaz creer que la construcción de un sistema de competencia bipolar reproduciría inmediatamente las características de los sistemas políticos donde se enfrentan y alternan en el gobierno coaliciones de conservadores y de progresistas. Los progresistas en estas y otras latitudes, como se sabe, no lo son sólo por su enunciación pública de propósitos, actitudes y valores. Lo son también cuando cuentan como base social a los destinatarios principales de su mensaje de progreso y equidad social. En Argentina, esto ocurre sólo en parte. No sólo porque amplios sectores populares, mayoritarios, continúan reconociéndose en el universo de la identidad peronista; también porque no son pocos los dirigentes justicialistas cuya colocación en el polo conservador es más el resultado de pertenencias históricas-congeladas por la competencia partidaria- que por espontánea adhesión a un justicialismo disociado en esta década de su tradicional interrelación a la justicia social.

¿Sería muy osado proyectar, como sugirió recientemente en una entrevista José Nun, que la Argentina pueda ser, en línea con la afortunada consignación de los Italianos de la coalición del Olivo, un "país normal"? En otras palabras, la búsqueda de esa "normalidad" ¿no podría abordarse también a



partir de la restructuración del sistema partidario argentino, encorsetado por adscripciones tradicionales que parecen ya no responder a los nuevos vivajes, abriendo paso a uno donde se alternen coaliciones de conservadores y de progresistas? Para ello la Alianza debería encalar la urgente construcción del polo progresista en el país. Un polo progresista como motor de agregación policultocultural, pero capaz de llegar a los sectores populares que busca promover en términos de equidad social. Esto conlleva hacer siempre más hincapié en torno a la cuestión social. Todo abandono de ésta tendrá en el justicialismo quiénes harán de ella -a través del asistencialismo- su activo más preciado.

Una amplia convocatoria de la Alianza, capaz de movilizar ideas y actitudes creíbles en lo social, debería estar dirigida hacia sectores populares peronistas para que puedan optar políticamente por otra fórmula que no sea la del Partido Justicialista y sus candidatos. Pero, al mismo tiempo, tal convocatoria amplificada debería constituir a la Alianza en un puente de encuentro con aquellos dirigentes peronistas insatisfechos con el justicialismo y posible-mente atentos tanto a fórmulas políticas novedosas, por fuera del sistema tradicional, como a un fuerte discurso de progreso social. De esta forma se podría comenzar a transitar el camino de la construcción de un sistema político auténticamente bipolar, con alternativas definidas donde el espacio para el transformismo sea siempre menor.

Al mismo tiempo la expansión social del polo progresista y su extensión a dirigentes peronistas no es sólo una necesidad en vías de construir un "país normal". Lo es también desde el punto de vista que para gobernar el cambio en la economía global, así como para encarar la reconstrucción institucional, se requiere, tanto en la Argentina como en otras partes, de grandes coaliciones y acuerdos estables.

Un segundo aspecto está relacionado con la distribución de fuerzas y recursos institucionales que pueden emerger después del 26 de octubre. La oposición en los próximos dos años va

a tener posiblemente una mayor relevancia en el Parlamento. Ello sería beneficioso para la democracia en términos de equilibrio de poderes. Hemos visto en estos días cómo en México oposiciones de distinto signo han emplazado al PRI a reconocer la importancia institucional del Parlamento en un sistema de gobierno presidencial. También en la Argentina, la experiencia **decisionista** del menemismo, así como la necesidad de actuar las reformas previstas por la nueva Constitución, deberían estimular a la oposición a acentuar la relevancia del Congreso. La iniciativa político-legislativa, dada la grave y progresiva degradación de las separación de poderes, es para la oposición un camino institucional a explorar para atenuar los abusos del gobierno y al mismo tiempo revitalizar el espacio público de debate. Pero lo es también para dotarse en los próximos dos años de una agenda política con valores, ideas y estrategias de gobierno que asuman la gravedad de los problemas institucionales y sociales producidos por el gobierno de Menem.

Por todo lo dicho, la opción por la Alianza adquiere significado y pro-



yección siempre que vaya más allá de una fórmula coyuntural. Se trata de un desafío que supone la osadía de lograr un cierto grado de cultura común, cuyo tejido principal es el de la confiabilidad, entre los participantes de la Alianza. Si bien el acuerdo electoral ya establecido a nivel nacional abre el camino en esta dirección, hay mucho por recorrer para desmalezar sospechas entre la UCR y el Frepaso. Pero ello debería realizarse sobre la base de la idea de que una alianza es en principio una fórmula en expansión, abierta a nuevos grupos portadores de exigencias distintas y que alcanzan a electorados distintos. De provincia a provincia o de zona a zona habrá fórmulas con otros o más actores con demandas distintas. No debería constituir, por lo tanto, un espacio rígido.

La Alianza tendría que ser flexible con respecto a las propias fuerzas que la fundaron. No debería sorprender, por lo tanto, que en los próximos meses ambas fuerzas continúen buscando su propio perfil e identidad, a través de iniciativas y tomas de posición individuales. Cada vez ha crecido con su individualidad, dirigiéndose a electorados con demandas específicas. Una alianza, claro está, no es un partido. Allí radica su originalidad y su virtud: la de sumar y potenciar individualidades. Sería errado ver con temor la competencia dentro de la Alianza.

Però mantener la unidad en la diversidad y potenciar al mismo tiempo al conjunto requiere, como se dijo, de confianza mutua. Y tal confianza podrá surgir con el tiempo de la acción realizada en común, en las elecciones, en el Congreso, en las iniciativas sociales, en los ámbitos de elaboración política y técnica. Pero también surgirá al ir gradualmente incorporando algunas reglas compartidas a ser respetadas para resolver potenciales conflictos. Una de ellas es, por ejemplo, la de la elección abierta para definir la candidatura presidencial el año próximo. Otra, la de dar prioridad al principio del acuerdo y el consenso para que en el nivel de gobernaciones, intendencias y legisladores se impulsen aquellos candidatos que mejor encarnan el

espíritu de la coalición y sean al mismo tiempo los más competitivos. Así como la elección abierta para las presidenciales puede generar una mayor participación a la selección del candidato más importante de la Alianza y el momento más alto, e institucionalizado, de la competencia dentro de ella, los acuerdos por consenso en los demás niveles (para los que es difícil prever una elevada participación como la que puede generar una interna abierta presidencial) puede evitar que prevalezcan aparatos que no garantizan la elección de los mejores representantes y, donde no exista aún un fuerte espíritu aliancista, se pongan en marcha lógicas de identidad en las que la consigna sea genéricamente *¡a votar a los "propios" contra los "otros"*. Sin duda, el armado de una alianza requiere una gran dosis de generosidad, de reconocimiento mutuo y capacidad para convivir y resolver tensiones y conflictos. Allí radica una de las claves para el éxito de este nuevo entramado político.

Cabría suponer, paralelamente, que de asumir la Alianza un carácter abierto y expansivo se pueda formar un espacio de referencia común en tanto alianza propiamente dicha. Es plausible que sea creciente el número de ciudadanos que busquen participar, en cualquier nivel, desde un círculo cultural a un comité de campaña, del espacio aliancista sin hacer referencia a los canales tradicionales, y ciertamente cerrados, de los partidos fundadores. Un eventual movimiento independiente debería ser observado con entusiasmo, y como vehículo para la participación, incentivado e integrado para dar vitalidad y originalidad a la Alianza. Atendiendo a la demanda ciudadana de liderazgos creíbles y fórmulas abiertas, tal vez se pueda volver a prestigiar la política y comenzar a transitar el difícil camino de dar a la Argentina un gobierno serio, republicano y progresista en 1999.

Nota

* Una primera versión de este artículo fue publicada en *Escenarios Alternativos* N°2, 1997.

La transición al posmenemismo

La constitución de la alianza opositora ha producido algunos cambios que parecen irreversibles en la arena política argentina. El alma de esos cambios es la incertidumbre introducida en el futuro de las relaciones de poder en los próximos años. Todos los actores aparecen, en consecuencia, obligados a replantear su estrategia para el futuro próximo.

Edgardo Mocca

El menemismo, preparado como estaba para una batalla esencialmente dirigida a influir en la sucesión justicialista de su gestión, ve prematuramente erosionado su capital político. Es difícil imaginar un resultado electoral en octubre que habilite sus proyectos reeleccionistas. Y las posibilidades de que Menem sea "el gran elector" en 1998 están más asociadas a la eventualidad de una derrota de Duhalde que a un triunfo general del justicialismo factible de ser interpretado como un plebiscito a favor del Presidente. La posición de Menem después de octubre será un elemento de alta potencialidad conflictiva para el conjunto del sistema político.

El comportamiento del peronismo en el gobierno ha estado históricamente asociado a la unificación del liderazgo en la figura presidencial; es difícil de concebir la convivencia de un peronista en el gobierno y otro procurando capitalizar las nuevas demandas desde un lugar de presunta oposición, en los marcos de una institucionalidad democrática medianamente ordenada. Esta complejidad, que ya estaba planteada antes de la constitución de la Alianza, se agrava ahora porque la coalición opositora aparece capaz de competir por el sitio central de la opo-

sición desde una perspectiva de reforma democrática y social.

Es muy difícil prever el comportamiento del duhalidismo haciendo abstracción de los resultados electorales. Su candidatura presidencial prematuramente lanzada pocos días después de la victoria menemista de 1995 entró en una zona de visuales turbulencias con la emergencia de la Alianza. Descartada la posibilidad de un triunfo ampliado del PJ a escala nacional, la supervivencia de sus pretensiones está exclusivamente asociada a un triunfo en la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de una amplia victoria provincial no parece corresponder a ninguna realidad como no sea la de la retórica del gobernador; no es descartable la posibilidad de una derrota que significaría una avería irreversible de su proyecto presidencial. Pero aun en el caso de un triunfo electoral en octubre, el panorama del gobernador bonaerense distaría mucho de lucir despejado. Según se insinúa ya en la presente campaña, su estrategia es la de una cada vez más acelerada diferenciación respecto de Menem y su gobierno. La cuestión cuya resolución aparece más problemática es cómo hará Duhalde para sostener la coalición social y electoral sobre la que se fundó la gestión menemista. Para asegurar su victoria en 1999, Duhalde tiene que recuperar la confianza de los sectores medios y trabajadores empobrecidos en los últimos años, sin sentir el humor de quienes, desde los sectores medio-altos aportaron su voto pragmático a favor de "las transformaciones".

Ese objetivo, que ya no era sencillo, se ha hecho más complejo con la presencia de la Alianza. Entre 1997 y 1999 hay un largo trecho que puede incluir momentos críticos. Pasada la tregua electoral, será necesario volver a revisar las condiciones de los acuerdos con los organismos internacionales, las metas presupuestarias y los servicios de la deuda. El espacio para jurar lealtad al modelo y, al mismo tiempo, prometer reparación social se va a angostar neces-

sariamente será indispensable mucha solvencia táctica para encauzar la oposición con el carnet del partido de gobierno. Menem no hará nada, con toda seguridad, para facilitar esa compleja maniobra posicional.

Pero más interesante todavía es incursionar en el potencial crítico que la Alianza ha introducido en el interior de sus propios componentes. En ese plano, se ha hablado mucho de las dificultades de articulación, en plazos insólitamente breves, de dos tradiciones políticoculturales diferentes en muchos aspectos significativos. Sin embargo, es posible que sea más fértil enunciar algunos factores de conflicto que conciernen a la realidad interna de cada uno de los partidos y a ciertos problemas transversales para la construcción de un discurso apto para la transición posmenemista.

En la UCR no será sencilla la aceptación del paso de un movimiento tácito a una orientación aliancista más permanente del partido. Intervienen en este sentido poderosas tradiciones de identidad partidaria históricamente renuentes a toda alianza duradera, especialmente si no asegura un rol hegemónico a la propia parcialidad. No son pocos los dirigentes que prefieren sostener un discurso "antimodelo" con resonancias populistas articulado con la descalificación del Prepsao como fuerza exclusivamente mediática y sin consistencia estructural. El origen peronista de algunos de los socios de la coalición facilitan esta visión que simpatiza más con un pacto de gobernabilidad que con coaliciones alternativas de gobierno. Es muy posible, sin embargo, que el nuevo impulso que han tomado los sectores y dirigentes proaliancistas, junto a la superación de prejuicios que favorece toda experiencia compartida permita sostener exitosamente esta novedad histórica producida por el radicalismo.

El Prepsao ha tenido una conducta aliancista que está en las propias raíces de su constitución a partir de la confluencia del Frente Grande con la Unidad Socialista y otros partidos. Lo cierto, sin embargo, es que esa convicción de sus principales líderes no ha contado siempre con una adhesión activa de

todos sus dirigentes. En buena medida lo que ha afirmado el rumbo de ampliación de la política de alianzas, sistemáticamente impulsado por sus referentes centrales, ha sido el hecho de su éxito creciente desde 1994 hasta hoy. Esto plantea una serie de problemas a corto y mediano plazo. El primero es el de los resultados de octubre y su interpretación en el caso de que no satisfagan no ya los criterios sensatos de instalación de una alternativa, sino cierto existismo inevitable en toda elección y en especial cuando hay que "digerir" ciertas decisiones que no resultan muy agradables. Los problemas más complejos son, sin embargo, los que se relacionan con el futuro del Prepsao en la coalición durante los años de la transición al posmenemismo, entre 1997 y 1999.

Obligado a manejar una compleja tensión de alianza y competencia con un partido de profundas tradiciones y sólida estructura, el Prepsao estará forzado a repensarse como fuerza política. La actual constelación de fracciones dispersas e insuficientemente articuladas en términos de perspectiva política no ofrecen el sustento suficiente para

alcanzar la madurez que hace falta para reforzar la Alianza y, al mismo tiempo, competir de manera pareja con el radicalismo. El Prepsao ha acercado a la Alianza a vastos sectores de la sociedad atraídos por un impulso ético y un horizonte de valores cuya representación política era insuficiente hasta su aparición. Pero esa atracción social no tiene adecuada expresión organizativa, ni resulta fácil construirla sin repetir los rasgos menos seductores de los partidos tradicionales.

Las figuras convocantes del Prepsao deberían lanzar una convocatoria amplia y original, capaz de acercar a un gran número de personalidades relevantes en diferentes medios de la actividad social, política y cultural para sentar las bases de una fuerza capaz de ser un fuerte reaseguro para la continuidad de la Alianza y con aptitud para seguir renovando el sistema político argentino.

Existen además problemas que son comunes a ambos socios de la coalición. El más importante de ellos parece ser el diseño de una política para los años que van desde la elección de octubre y el cambio presidencial en 1999.



Habrá que enfrentar las descontentas presiones hacia la división de la coalición, que contarán con todo tipo de ayuda por parte del oficialismo. Y hacerlo articulando una clara construcción de la diferencia respecto del oficialismo con una lucha por aportar legitimidad a la vida político-institucional del país. Asegurar una transición no traumática desde el punto de vista institucional será una ayuda invaluable para abrir en 1999 una perspectiva alternativa para la Argentina. En el camino de los cambios "posconservadores" que se vienen abriendo paso en Europa, hay que construir una agenda política que asuma los cambios irreversibles de la sociedad argentina para reinstalar los valores que han sido sacrificados en el altar del fundamentalismo de mercado y en la cultura antisolidaria de la frivolidad y el éxito fácil. Para llenar esa agenda de las prioridades insoslayables de la inclusión social, la dignidad y el imperio de la ley.

Radicales y prepsaístas tienen todavía una tarea adicional: la de fortalecer su sociedad y saber, al mismo tiempo, incorporar sectores que vayan progresivamente identificándola como una perspectiva alternativa cierta. Saber que las fuerzas que hoy componen la Alianza no vienen del mundo de los principios incontaminados sino de las duras peripécias de nuestra historia política servirá para aventar toda forma de sectarismo. La consolidación de una identidad aliancista que multiplique la capacidad de convocatoria de sus socios fundadores requiere una enérgica voluntad política y una ingeniería político-institucional capaz de asegurar que cada uno aporte su capital acumulado en la sociedad argentina. Es decir, una competencia que no sea mutuamente destructiva sino de consolidación y enriquecimiento de la coalición.

En fin, son muchas las dificultades de esta empresa recién constituida. Pero es una fortuna poder comentar algunas de ellas y no estar a esta altura lamentándonos de un seguro triunfo oficialista y de un monopolio del partido de gobierno en la batalla por la sucesión para 1999.

El mundo del trabajo

Julio Godio

La formación de la Alianza tácitamente ha permitido crear el polo opositor que estaba ausente y que una importante parte de la sociedad reclamaba para desarticular el hegemonismo menemista-duhaldista en las próximas elecciones parlamentarias del 26 de octubre. La Alianza se ha constituido sobre un núcleo de demandas políticas básicas: contra la corrupción, por la transparencia, la seguridad y la educación y otras. Pero su legitimidad última residirá en si se convierte en el núcleo convocante a una Concertación político-social a la chilena, que permita primero lograr el gobierno en 1999 y luego cambiar el actual rumbo capitalista de "economía de exportación" con exclusión social por un capitalismo productivo exportador con un mercado de trabajo que garantice empleos de calidad, redistribución equitativa del ingreso y, por lo tanto, permita reconstruir la cohesión social.

La Alianza ha permitido a diferentes culturas políticas argentinas encontrar el espacio político común para crear las condiciones para la emergencia de una nueva e inédita cultura pluralista de progreso. Esto es así porque la Alianza es producto y respuesta a las nuevas tensiones sociales y políticas generadas por la combinación entre democracia política pluralista y reforma económica: esas nuevas tensiones sociales y políticas sólo se podrán resolver construyendo una nueva relación política entre el Estado, la sociedad y el mercado. Esa nueva relación política se expresa en la concertación sociopolítica en formación en la Argentina.

Desde 1982 el Estado argentino ha ido perdiendo legitimidad social: la aventura militar en Malvinas, el cruel descubrimiento del genocidio, las dificultades y limitaciones de la UCR para encauzar una

reforma económica y constitucional concertada y por último la apropiación del espacio público por las grandes empresas y el "libre mercado" han terminado por desacreditar al Estado. Por eso, la prioridad de la Alianza -si tiene voluntad de transformar al país en el mundo globalizado- es permitir que el Estado recupere su "soberanía interior", esto es, su capacidad para ejecutar la voluntad democrática y obligar a los intereses privados concentrados y la lógica financiera internacional a aceptar y cumplir con objetivos de a) desarrollo económico integrado, y b) la reconstrucción del tejido social. Pero la soberanía interior no se restablece sólo con el soporte de una mayoría electoral de ciudadanos, sino también con el soporte duro de las instituciones que organizan al "mundo del trabajo", esto es, sindicatos, organizaciones empresarias, cooperativismo, etcétera, y también a los nuevos movimientos sociales.

Los partidos constitutivos de la Alianza han preservado con razón su autonomía frente a las organizaciones sindicales, especialmente el MTA y la CTA. Por cierto, también las organizaciones sindicales afines a la Alianza desean preservar su autonomía. Ambas actitudes políticas son positivas. Pero esto no debe ocultar que la Alianza carece de soporte sindicales estables y que ello puede ser perjudicial al momento de tener que presionar fuertemente sobre el gobierno menemista para cambiar el rumbo de la política económica, social y laboral.

El menemismo ha producido una "modernización conservadora", en consonancia con el viento neoliberal mundial que hegemoniza el proceso de mundialización, interdependencia y tercera revolución tecnológica. Pero es una modernización que segmenta necesariamente el mercado de trabajo -como ocurrió en Chile a fines de los 70- reduciendo el segmen-

to de empleos calificados y aumentan- do el segmento de desempleados, subempleados y el trabajo precario. **Por eso, los componentes sociales y laborales de la reforma económica menemista han producido una enorme fractura en la base social del Partido Justicialista.** En 1983, la UCR logró instalarse en la periferia más politizada del peronismo, consciente de que el radicalismo era la mejor expresión de la democracia. Pero el núcleo "duro" del peronismo -compuesto por los trabajadores asalariados de diferentes categorías sociales- permaneció incólume. Entre 1990 y 1997 una parte de este "núcleo duro" se pauperizó y fusionó intereses con sectores sociales con otras identidades políticas. Así, se ha formado -en la base de la sociedad- un nuevo núcleo duro y dinámico, el de los "nuevos pobres", con capacidad para movilizar y atraer a sectores de los "pobres estructurales". El "fenómeno Meijide" en el Gran Buenos Aires es imposible de entender sin captarse esta nueva realidad sociopolítica. El efecto de la ruptura política entre una parte de los trabajadores asalariados y el menemismo ha erosionado la tradicional "lealtad única" de los trabajadores con el PJ y con el aparato sindical. Así, por primera vez desde 1946, una parte sustancial de los trabajadores sindicalizados no votará en octubre por el peronismo y lo hará por una fuerza política que se declaró oposita al viejo estatismo populista: son trabajadores que en su mayoría aspiran a un país moderno, con una economía de mercado pero regulada y con derechos sociales y laborales garantizados. Así las cosas, este trasvasamiento de votos provenientes del mundo del trabajo es un acontecimiento que tendrá profundas consecuencias políticas no sólo para el PJ, sino también para la Alianza.

4 El desplazamiento de votos de "nuevos pobres" de origen peronista (y pobres estructurales) movilizados por el Frente Grande, sectores de la Iglesia Católica, etcétera, tiene su explicación de base en el desempleo y el subempleo masivos. Tam-

bién se explica por la percepción entre los trabajadores que la precariedad laboral es una estrategia política para someterlos al autoritarismo empresarial o, como se dice en la calle, "somos los nuevos esclavos de la Argentina".

Pero este proceso de ruptura política (que no implica ruptura masiva con el "peronismo" como imaginario social) ha sido posible por las movilizaciones sindicales que se iniciaron en 1994, y que dieron lugar a huelgas nacionales pese a la desocupación y que fueron promovidas por los sindicatos, especialmente los agrupados en el MTA y el CTA, pero también por la propia CGT y las 62 Organizaciones. **Por lo tanto, la brecha política ha sido abierta por la Alianza al crear el polo opositor, pero por ella están marchando personas que luego del 26 de octubre exigirán respuestas sociales y laborales al bloque político opositor.**

5 La Alianza puede vencer en octubre. Como en Chile los partidos de oposición vencieron a Pinochet en el plebiscito. Pero en Chile la oposición siempre tuvo a los sindicatos como apoyo firme, incluso



cuando la Concertación llega al poder en 1990 y hasta la fecha. La Alianza, en cambio, carece de apoyo sindical masivo y estable. Esto es peligroso en un país altamente sindicalizado. En Alemania existe una sentencia nublada que puede traducirse así: "Si los dioses deciden hacerte fuerte, es porque previamente te han poseído, de modo que también pueden destruirte". Aplicada la sentencia a la Alianza, se podría decir que lo que la ha hecho fuerte -su inteligencia para instalarse en la sociedad política creada por la democracia y crear un polo electoral poderoso- puede también nublar a quienes creen que el poder real se basa en controlar votos y fichas partidarias, y que por lo tanto no es fundamental establecer una relación estable entre la acción política y la acción sindical. Tal visión podría llevar a la ruina a corto plazo (o desembocar en una experiencia triste en el gobierno) a una gran creación política que puede tener la importancia histórica que tuvieron fuerzas políticas transformadoras en 1880, 1916 ó 1946. Lo cierto es que nadie se percibe a sí mismo como ciudadano, sino, en su forma superior, como ciudadano, trabajador y consumidor de bienes materiales y culturales. Así las cosas, los votantes por la Alianza serán desde el 27 otra vez personas que reclaman empleo y condiciones de trabajo humanas, es decir, "ciudadanía social".

6 Así las cosas, la Alianza, triunfe o no, será mayoría electoral o triunfe porque se acerque a pocos puntos del PJ, al otro día debe iniciar un debate profundo sobre temas que serán centrales. Entre ellos, uno es laboral y el otro se refiere a la misma arquitectura política de la Alianza. El primer tema se planteará el 10 de noviembre, cuando la Cámara de Diputados discute el acuerdo gobierno-CGT de reforma laboral (o se encuentre frente a un gobierno que produce una huida hacia adelante y refloja los tres decretos flexibilizadores intentando reducir el desempleo con el aumento del trabajo precario). Pero ya no será suficiente oponerse, se necesita que el

Congreso apruebe una reforma laboral similar al acuerdo sindicatos-empresarios de España de este año, donde el eje es la creación de empleos indefinidos con contrapartidas que reducen costos laborales en empresas donde participan también los trabajadores en las decisiones de planificación estratégica. Se trata de una "prueba de fuego", porque implica la capacidad para consensuar un proyecto de oposición con sectores del PJ y con apoyo de sindicatos y empresas. Si se tiene éxito, a éste deberá seguir un programa único masivo de empleo, que sea el inicio de una modernización productiva de alcance nacional y con concentración de recursos en su aplicación. Como contrario, se abre una etapa de fuertes conflictos laborales en 1997, que también deberá ser asumida por la Alianza a riesgo de aislarse del torrente laboral.

El otro tema se refiere a que en la Alianza -en particular en el Frente Grande y la UCR- pesan demasiado las posiciones que consideran a los sindicatos como "auxiliares" políticos. Esta teoría es obsoleta y peligrosa, y debe ser reemplazada por la construcción institucional estable de una Concertación sociopolítica donde los sindicatos, organizaciones empresarias y movimientos sociales tengan un lugar definido y pesen en las decisiones. La táctica de convocar a una Multisectorial hoy y desactivarla mañana va a contrapelo con la compleja situación política que se originará por la tensión entre garantizar la gobernabilidad y proponer y presionar sobre el gobierno para comenzar a resolver realmente los problemas del desempleo, el subempleo y la precariedad.

Ambos temas, el referido a la reforma laboral y el referido a la participación sindical en la concertación sociopolítica liderada por la Alianza, deberían por lo tanto ser preocupaciones centrales para fortalecerse y poder consolidar la enorme fuerza electoral acumulada en un período tan corto. Los millones de trabajadores que votarán a la Alianza lo hacen porque confían que "otro país es posible".

Liberalismo e igualitarismo

La descripción más habitual de la Alianza presenta a ésta como un frente de centroizquierda. Notablemente, sin embargo, las principales reivindicaciones de la alianza opositora coinciden casi exactamente con los reclamos típicos del liberalismo: justicia independiente; separación de poderes; límites a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo; mayores controles sobre los funcionarios públicos; respeto a la prensa.

Roberto Gargarella

Los principales dirigentes de la Alianza terminaron de despejar las posibles dudas al respecto, a través de una de sus primeras definiciones programáticas. En efecto, con cierta espectacularidad y esmerada contendencia, sus voceros dejaron en claro que la Alianza no estaba dispuesta a modificar las bases del rumbo económico definido por el menemismo, un rumbo, de orientación al menos, "libre-mercadista". Obviamente, todo este "hecho del liberalismo", en principio no resulta especialmente bueno ni malo, pero sí ayuda a apreciar la precariedad del debate político del país: se combate actualmente por llegar al punto de partida de la República que comenzó a gestarse hace más de cien años (punto de partida donde se intentó establecer una básica división de poderes; un elemental sistema de frenos y contrapesos; etcétera).

Alguien podría decirnos, de todos modos, que una situación como la señalada no constituye una muestra de nuestro atraso político, sino -por el contrario- una saludable señal de los importantes progresos que hemos ve-

nido realizando colectivamente. En efecto, hace poco más de diez años, y luego de la dictadura militar, el radicalismo llegó al poder afirmando, por sobre todo, nuestro elemental "derecho a la vida". Hoy, dicho reclamo forma parte de nuestros "entendimientos compartidos", como diría el filósofo Michael Sandel, y es por eso que estamos en condiciones de extender nuestros reclamos hacia horizontes más lejanos.

Según entiendo, sin embargo, es más realista considerar que hoy no nos encontramos escalando una pendiente que nos lleva hacia el progreso infinito sino, más bien, situados en la árida meseta política en la que tantas veces hemos quedado varados. Páñense al respecto, por ejemplo, de qué modo el liberalismo de la Alianza, o puesto al conservadurismo del gobierno, reproduce un debate liberal-conservador que marcó buena parte de la historia institucional argentina (y latinoamericana). Me refiero a un debate entre dos fuerzas aparentemente opositas, pero reunidas, al menos, en un grave punto común: su falta de compromisos igualitarios genuinos, tanto en el aspecto político, como, sobre todo, en el aspecto económico (un igualitarismo ausente más allá de un importante pero absolutamente insuficiente reclamo por la "igualdad ante la ley"). Por supuesto que, hoy como ayer, las diferencias entre una corriente y la otra siguen siendo significativas: en un país arrasado, todavía hoy como ayer, por el autoritarismo político y el desprecio de la ley, el liberalismo representa una promesa por la cual hasta los agnósticos debieran rezar. Sin embargo, todavía resulta muy difícil de explicar la ausencia de un honesto "igualitarismo radical," en un país como el nuestro, tan marcado por las desigualdades. Esta "ausencia" resulta aun más inexplicable cuando reconocemos que, en países como Francia, Inglaterra, o los Estados Unidos (cuyos debates fundacionales ejercieron una enorme influen-

cia en nuestro país) las disputas constituyentes estuvieron marcadas por un enfrentamiento entre corrientes conservadoras y radicales-igualitarias.

Tal vez, podría objetarse, el análisis anterior se encuentra marcado por un innecesario escepticismo cuando, en realidad, el moderado igualitarismo de la Alianza tiene como principal razón comprensibles motivaciones estratégicas: ¿para qué exacerbarnos los ánimos, para qué remover las aguas en este momento preelectoral, cuando existen buenas esperanzas de salir airoso en los futuros comicios? Entre las razones que tal vez existan, al respecto, podrían suscribirse las siguientes.

En primer lugar, si es que efectivamente la Alianza piensa llevar adelante una política igualitaria (lo que implicaría, por ejemplo, desafiar las bases del actual estado de cosas económico), más vale dejar dicho punto en claro en el contrato que se establezca con los votantes. No representaría un buen comienzo, por el contrario, deshacer las expectativas ciudadanas que el mismo elenco de la Alianza contribuyó a forjar en los momentos previos a los comicios.

En segundo lugar, y en lo que representa un problema más profundo para los integrantes de la Alianza, lo que efectiva y genuinamente se haga y diga hoy condiciona en buena medida lo que podrá realizarse en el futuro.

Claramente, los grupos y sectores con los que hoy se coaligale la Alianza determinarán en parte los márgenes de maniobra futuros. Para dar un ejemplo absurdo: si hoy más principales y más influyentes aliados fueran sectores de la corporación militar, luego, obviamente, tendré problemas para llevar adelante una política que tenga a tales sectores como principales afectados y sobre todo teniendo en cuenta la enorme capacidad de presión de estos grupos (de ser razonable lo dicho, ello también nos ayudaría a calificar no sólo como incoherentes, no sólo como moralmente reprochables, sino también como ingenuas, algunas afirmaciones hoy tan en boga: así, por ejemplo, las que nos dicen que "estamos ingresando en la etapa social" de nuestra democracia, luego de una etapa en la que se autorizó la profundización de las diferencias entre los más y los menos aventajados).

Quisiera considerar, finalmente, otra posibilidad: que la Alianza no haga explícito un discurso más igualitario, no por falta de sinceridad sino, simplemente, porque no existe al respecto un acuerdo profundo entre la mayoría de sus miembros. Si esta fuera la situación propia de la oposición, convendría avanzar algunas reflexiones adicionales dirigidas, en especial, hacia aquellos de entre sus miembros que sí se identifican con propuestas

políticas y económicas igualitarias (y reconociendo, obviamente, que la definición de igualitarismo no es sencilla ni obvia, del mismo modo que la definición de liberalismo o comunismo o anarquismo).

Ante todo, a los sectores más igualitarios de la Alianza les conviene reconocer que dicha coalición descansa todavía, al menos, en dos puntos de reposo (la UCR y el Frepaso), y que esta tensión estructural representa una seria amenaza futura, en todo sentido. Por ello conviene, desde un inicio, explicitar e integrar las propuestas más igualitarias (si las hubiera) dentro del marco general de acuerdos de la oposición. Lo peor que podría ocurrirle a la Alianza, en cambio, sería que las tensiones actualmente latentes terminasen traducéndose en futuras y encarnizadas disputas internas, en incoherencia discursiva o en un indeseable esquizofrenia programática.

Lo dicho no refleja una mera "preferencia por la coherencia". Refleja, más bien, la convicción de que un buen gobierno requiere ser consecuente con algunos, aunque sean pocos, buenos objetivos. La ambigüedad, por el contrario, amenaza con contaminar y echar a perder cualquier política. En definitiva, las actitudes ambiguas (entre otros varios factores) nos ayudan a explicar tanto la hiperinflación como otros horribles demonios: no se puede "querer complacer en todo" al *establishment* a la vez que beneficiar a los sectores más desventajados. Entiéndase, no estoy diciendo que la política sea "blanca" o "negra", sino que no puede ser "blanca" y "negra" a la vez.

Los sectores aliancistas que defiendan posturas igualitarias tienen entonces, frente a sí, la difícil responsabilidad de convencer a sus compañeros de ruta, del valor y de la urgencia de adoptar políticas más igualitarias. En el ejercicio de dicha saludable tarea, ante todo, deben sincerar orgullosamente sus compromisos: que no haya llegado el momento, en nuestro país, en que nos parezca imprudente o vergonzoso hablar de la atención prioritaria que merecen los más desafortunados.

Oficialismo y oposición: fronteras móviles

La cultura política argentina, esa que se expresa en las expectativas y relaciones entre dirigentes y dirigidos, funcionarios y "expertos", políticos, periodistas e intelectuales, etcétera, deja mucho que desear.

Emilio Tenti Fanfani

Muchos dicen que "la gracia" de la democracia es la existencia de una oposición libre, permitida, legítima, que puede ejercerse y que se supone que cumple una función. Pero esto no basta. En otras palabras, no es suficiente que existan un gobierno y una oposición, con un límite claramente establecido entre ambos.

En las sociedades más desarrolladas y pluralistas no existen posiciones (de gobierno o de oposición) claramente delimitadas y para todos los temas. Como ya no existen cosmovisionales totales (que siempre terminan siendo totalitarias, es decir, excluyentes y muchas veces violentas) que dan respuestas unívocas y distintivas en todos los terrenos de la vida (la política, la economía, la moral, el arte, la ciencia, el deporte, etcétera), ya no existen ideologías integradas. No se "es" oficialista u opositor, sino que se ejercen acciones de aceptación o de rechazo. Más bien, dadas las circunstancias, se debería poder estar muy de acuerdo en ciertas cosas, medianamente en otras, muy en desacuerdo en otras y sin posición tomadas en las demás, porque no se sabe, no se tiene opinión o se tienen dudas (ese "privilegio de intelectuales" que habría de convertir en patrimonio de la ciudadanía...).

¿Serán posibles estas posiciones diferenciadas en la Argentina de hoy? Demasiado a menudo en el gobierno (y a veces también en la oposición) el que no piensa en bloque, el que no piensa "al por mayor", sino que lo hace "al menudeo", que examina tema por tema,

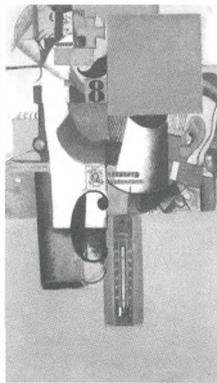
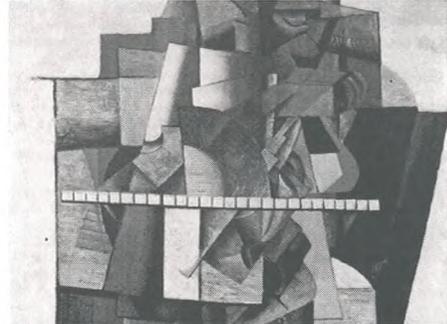
asunto por asunto y toma posición luego de este examen racional de los hechos, aparece como un tipo molesto. En muchas ocasiones se exigen adhesiones totales, incondicionales y permanentes. Cualquier desplazamiento de las posiciones previstas es considerado como una deslealtad, como un oportunismo barato o como una traición a "los principios" (esos principios de los cuales se deducen las posiciones compactas y homogéneas).

Desde la oposición, "por principio", por lealtad con los colegas de partido, por afán de distinción (del oficialismo) se producen rechazos globales y sistemáticos. Son posiciones por deducción y "por principio". Yo "por principio... me opongo". Y suena bien, suena a persona "fina". Me puedo ahorrar el examen de la cuestión, el análisis de los argumentos del adversario. Me opongo porque soy opositor, valga la tautología. En el gobierno se tiende a exigir adhesiones sistemáticas y compactas, en todos los frentes y todos los días. Se apoya porque se es leal a un gobierno (a un

partido, a un ministro, a un superior, etcétera). Aquí también la lealtad es una cuestión de principios (y de conveniencia, si se quiere conservar lo que se tiene, el lugar que se ocupa en una administración, en una gestión, hay que obedecer, hay que acordar en el sentido de estar de acuerdo).

En un contexto como el actual sería más sano liberar los espíritus, dejar que se ejerzan el raciocinio y el análisis de las cuestiones, que se midan sus múltiples determinaciones. Sería saludable que el que manda y ejerce funciones de ejecución o representación esté rodeado de gente pensante y no de gente obscecada o atemorizada, que obedezca por conveniencia o por pereza intelectual, o "por principios" y "lealtad" a una ideología, una causa o a un líder. El que manda necesita de gente que ejerza una fidelidad responsable, la cual es atributo de personas libres y dotadas de raciocinio propio.

En la política moderna las coaliciones son locales y temporales y no totales y eternas. No cubre todo el territorio de la agenda pública. Tienen objetivos limitados: reformar determinada institución, instituir una nueva, etcétera. Podríamos ponernos de acuerdo en lo que podemos ponernos de acuerdo y con quienes compartan determinados puntos de vistas y soluciones. Ciertas cosas las hacemos con unos y otras con otros. Depende de la cuestión. El que procede así no condena personas, no se opone a personas (es decir a individuos totales), sino a ciertos roles (o agentes, como dice la jerga sociológica contemporánea), es decir a sujetos situados en posiciones múltiples y diferenciadas en espacios estructurados (el campo económico, el campo artístico, el campo científico o el campo político). Puedo estar de acuerdo con un colega de trabajo respecto a la resolución de cuestiones relacionadas con el uso del espacio en la oficina, al estilo de dirección, pero no compartir sus gustos y preferencias estéticas o sus opciones morales o políti-



cas. En estas condiciones no me opongo a él como persona, sino como agente que "juega" en un campo determinado.

La exigencia de lealtad compacta de los oficialistas (el que no acuerda en todo es un enemigo o un traidor) es correspondida por la oposición. Cada oficialismo tiene la oposición que se merece. En otras palabras, vivimos en un sistema, cada uno es lo que es en la relación que mantiene con los demás. La oposición en la Argentina tiende a ser total y polarizada. Pensamos completamente diferente (al menos, aunque no sea cierto, en público hay que parecerlo). Nos oponemos en todo. Nada bueno puede hacer el gobierno, por principio... o todo lo hace bien. La condena es total y permanente. Acordar en un juego así estructurado, tiene un costo que hay que pagar (a veces no hay más remedio que consensuar, como se dice ahora). Todo acuerdo suena a defecación, a debilidad moral, todo pacto es componencia. El "todo está mal" no es un simple juicio de valor. Cuando la oposición ocupa el lugar del gobierno, tiene que deshacer, desconocer, barrer con todo lo que se hizo antes. Es un signo de distinción y de honor. También aquí se actúa sin examen racional y por principio.

¿Será posible ser más maduros en nuestras exigencias y en nuestras respuestas? La democracia y la libertad saldrán beneficiadas y la imaginación liberada. Quizá podría disminuirse la probabilidad del error. Especialmente quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, deberían alentar la disidencia, dialogar con ella, escucharla y no reprimirla, acallarla o reducirla. Alguien debería aconsejar al poderoso: "escucha a quien se opone, a quien osa decirte que no está de acuerdo con X o con Z, pero que está de acuerdo con Y".

Los cambios en la cultura y los comportamientos no se decretan, se extienden en el tiempo largo de la historia y no en el tiempo corto de los acontecimientos. Pero algún día habrá que empezar a dar señales de cambio, a dar testimonio de que no sólo se puede, sino que es ventajoso para todos mejorar los términos de la convivencia para avanzar en comunidad.

La política social de la Alianza

La política social del régimen impuesto por el gobierno de Carlos Menem requiere de una profunda revisión conceptual y no de meros ajustes de precios y cantidades.

Elisa M. Carrió

La siguiente analogía ilustra el problema. Cuando en 1912 el buque británico *Titanic* chocó con un iceberg en el Atlántico norte, mientras a bordo se celebraban suntuosas fiestas, muchos opinaron que la razón principal para la enorme cantidad de víctimas fue que a bordo había la mitad de botes salvavidas de los requeridos para la cantidad de personas transportadas.

Análogamente, para muchos, los problemas de la política social del gobierno menemista se deben sólo a que no tiene suficientes botes salvavidas para tirar a los que se cayeron al agua helada, a que falta un mejor adiestramiento técnico para los que manejan esos botes, a la mala selección entre los que pueden subirse a los botes y los que tienen todavía fuerzas para nadar solos.

Por el contrario, para nosotros el problema es evitar que el buque se trague el iceberg. Por lo tanto, la política social tiene que ocuparse de la definición del rumbo del buque, de prevenir el choque anticipando el rumbo del iceberg, de la elección entre comprar champagne y botes, de enseñar a navegar, de la distribución del trabajo y las recompensas entre los que hacen el esfuerzo para que la nave navegue y los que están de fiesta. La política social no es compensatoria de la política económica sino que la contiene. No es, como creen algunos, que lo económico le pone límites a lo social sino a la inversa. Sólo en la soberbia de los tecnócratas y en los intereses de grupos privilegiados se puede plan-

tear que lo económico es un fin en sí mismo.

¿Qué significa esto en la práctica? ¿Significa irresponsabilidad económica? Para nada. La responsabilidad en materia económica es crear los bienes materiales necesarios para el bienestar del conjunto de la sociedad, pero probado que para ello no se generen mayores daños que los supuestos beneficios provenientes de los nuevos bienes creados. Y esto es precisamente lo que ha pasado en los últimos años. Se ha creado riqueza de la que se apropiaron los que ya eran favorecidos en la distribución, al tiempo que se destruyeron instituciones y recursos imprescindibles para garantizar un mejor futuro para todos (como la educación y la salud públicas). No es sólo un problema de crecimiento y estabilidad de precios, sino fundamentalmente de distribución de la riqueza.

Hagamos números. Si en 1995, luego del crecimiento acelerado de la Convertibilidad, el 20 por ciento más pobre de la distribución de ingresos del país hubiese captado el mismo porcentaje del ingreso que le correspondía en 1980, los ingresos totales de ese grupo de los más desfavorecidos habrían sido 30 por ciento superiores a los que fueron. Más aun, los hogares por debajo de la línea de pobreza serían menos de la mitad de los registrados en 1995 y para que esto hubiese sido posible, el 10 por ciento más rico tendría que haber transferido sólo 5 por ciento de sus ingresos totales. ¿Alguien puede seguir sosteniendo sensatamente que la pobreza es un problema de falta de crecimiento o falta de asistencialismo? ¿Alguien puede decir que es irresponsable pedir que los más ricos transfirieran un porcentaje mínimo de sus ingresos para mejorar la situación de los más desfavorecidos?

La pobreza y la desigualdad sociales son fundamentalmente problemas de distribución de recursos. De recursos en un sentido amplio: económicos, técnicos, simbólicos. No sólo es un

problema de distribuir bienes, sino de distribuir capacidades y reconocimientos sociales. No se trata de darles comida temporalmente a los sectores más pobres. Hace falta que las mujeres de los sectores populares sean reconocidas como las mejores economistas, en tanto su eficiencia es mucho mayor cuando dan de comer a una familia con casi nada; los ineficientes son los que se endeudan sin control, los que sostienen su empresa con la explotación de los trabajadores. Para nosotros, una política social alternativa exige un nuevo contrato de distribución de recursos sociales, de distribución de cargas y recompensas, de costos y beneficios. La política social no puede reparar ni compensar políticas económicas excluyentes: la política social de la Alianza debe ser parte fundamental de un nuevo contrato social.

¿Por qué es necesario un nuevo contrato social? ¿Cuál es el contrato social que impuso el régimen del menemismo? Es un contrato donde el trabajo es más inestable, donde aumentan las horas trabajadas por persona y por grupo familiar, donde hay cada vez más gente que busca cualquier trabajo y donde todos se vuelven rápidamente fuerza de trabajo "obsoleta" (descartable). Es un contrato donde la salud y la educación de cada uno tiene cada vez menos que ver con la del "otro" y donde el nivel de los beneficios depende de la capacidad de pago. Es un contrato donde algunos gastan por encima de sus recursos y que, para pagar ese déficit, se vende como sea el patrimonio social y se endeuda cada vez más al país. Es una sociedad donde se concentra el poder económico, político e informativo en grupos reducidos y asociados entre sí, con intereses corporativos ajenos al interés general de la sociedad.

¿Es ésta una sociedad de libres como nos prometían los liberales de este régimen neoservador? Para nada. Es una sociedad en donde las personas son cada vez más cautivas del lugar donde quedaron ubicadas en el "ajuste". Los empleados, están cautivos de las condiciones de trabajo que les imponen porque la única alternati-

va es la desocupación. Los desempleados están cautivos de cumplir con los requisitos que les exigen para "merecer" la asistencia social, porque no tienen esperanza de mejorar su situación trabajando. Los niños están cautivos del tipo de vida que les pueden ofrecer los padres y madres que les

tocaron en suerte. Es una sociedad atrapada en un contrato social oligárquico, donde la mayoría está cautiva de lo que decide ofrecerle una minoría privilegiada. El contrato social del régimen que impuso el menemismo no es un contrato donde se intercambian equivalentes, sino una relación con-



tractual donde los poderosos imponen sus condiciones a los subordinados.

En esta sociedad de cautivos, el propio gasto social se vuelve principalmente un instrumento de control social. La política social se reduce al objetivo de gastar "en" los pobres, pero no en lograr que los pobres desarrollen capacidades y tengan oportunidades para ganar y poder gastar. Para esto último, no hay sólo que gastar en los pobres sino gastar en la creación de puestos de trabajo, gastar en ampliar los mecanismos para que los pobres accedan a escuelas y hospitales de primer nivel. Gastar en crear las condiciones para que los marginados se integren y participen plenamente de los beneficios del crecimiento material que permiten las nuevas tecnologías.

En esto también hay que ser claros. El gasto social de la Argentina no es elevado, ni medido en parámetros regionales ni internacionales. Lo que sucede es que la recaudación fiscal es baja. Por lo mismo, si bien el gasto social puede en algunos casos ser ineficiente y mal asignado, sobre todo después de todas las reformas que se hicieron, el principal problema de eficiencia y asignación está en la captación de recursos que financian los gastos del Estado. Los economistas que se suponen especialistas en cuestiones fiscales deberían dejar de exigir que los maestros hagan más con su magro salario, que los médicos en los hospitales hagan más con los escasos recursos que disponen y explicarle a la sociedad por qué son tan ineficientes para recaudar impuestos, por qué son tan ineficientes para exigir mejores condiciones de pago de la deuda externa, por qué son tan ineficientes que tienen problemas fiscales después de todos los ajustes y ventas del patrimonio público que se hicieron.

Frente a este contrato social oligárquico, ¿cuáles son los elementos claves de un nuevo contrato social democrático y progresista? Primero, empleo para todos y en condiciones justas. ¿Por qué? Porque para que un contrato social sea justo y pueda cumplirse, tiene que garantizar que la gente pueda desarrollar plenamente sus

capacidades y recibir una remuneración justa por ello. Crear puestos de trabajo tiene que ser el objetivo central de la política económica. Esto no significa que el empleo deba ser de las mismas características que en el pasado, puede ser más flexible, puede ser por menor tiempo, pero lo que no puede es deteriorar el bienestar de la gente. Por lo tanto, hay que revisar las condiciones de la relación laboral y es allí donde la política social debe establecer parámetros para que los puestos de trabajo disponibles se distribuyan entre la mayor cantidad de gente (por ejemplo, reduciendo la jornada laboral), y para que se fomente un consenso distributivo en el interior de las empresas (por ejemplo, participando a los trabajadores de las ganancias, permitiendo que sean accionistas de las empresas y opinen sobre su gestión). Esto no atenta contra el capital, sino que favorece el consenso entre capital y trabajo. Esto no es conflictivo, sino que fomenta la armonía social. Por lo tanto, es razonable que la sociedad premie a las empresas que incorporan estas formas de organización porque demuestran que realmente están interesadas en el país.

Segundo, para que pueda distribuirse mejor el trabajo y la remuneración al trabajo es imprescindible que todo el mundo acceda al mejor nivel de educación posible. La educación no tiene un fin instrumental, no se educa para tener capacidad individual de trabajo. Se educa para ser capaz de integrarse de forma plena en una sociedad que trabaja socialmente. Se educa para vivir en sociedad, y esto incluye el trabajar en sociedad. Es de gente educada pagar bien el trabajo, reconocer el trabajo de otros, distribuir los frutos de trabajo. Una "empresa" es un emprendimiento colectivo. Es de gente educada ser emprendedor y es muy mal educado ser un mero "hombre de negocios".

Tercero, se debe establecer un nuevo arreglo entre políticas universales y políticas selectivas. No es que las políticas "focalizadas" sean malas en sí mismas, lo malo es que se plantean como una alternativa a las políticas universales, que pretenden reemplazarlas.

La política focalizada y asistencial debe ser la excepción y no la regla. No hay que focalizar a los pobres, hay que focalizar a los ricos con impuestos. Por lo mismo, no es que el seguro privado sea malo en sí mismo, lo malo es que se plantee como alternativa al público, que se destruya al público para construir el seguro privado de unos pocos. Lo básico y universal, integrador y englobador, debe ser la prioridad. Lo otro es lo complementario. Lo universal es lo que garantiza que no se choque el iceberg, el rumbo del buque y las fiestas están condicionadas a que se cumpla con esa garantía. Por lo mismo, lo universal es lo que garantiza que todos los pasajeros del buque están preocupados por el destino de todos.

Cuarto, se debe fomentar la plena autonomía y participación de las personas, o sea, hay que dotar a la gente de capacidades para ejercer su libertad. Es parte de la política social el ampliar las posibilidades para que la ciudadanía pueda deliberar de forma informada sobre cuestiones públicas. Para tener esas capacidades tiene que estar libre de la desesperación por conseguir ingresos mínimos, libre de la desesperación por no tener trabajo, libre de la desesperación por no tener cobertura médica, libre de la desesperación por no estar educado para comprender los nuevos códigos que imponen los cambios sociales. Esa es la libertad por la que vale la pena luchar y no la libertad donde se pueda elegir pero no se tiene cómo acceder a lo que se quiere.

Quinto, la política social no sólo debe evitar discriminar, sino que debe promover la igualdad de trato. No debe confinar a los pobres en hospitales para los pobres sino que debe promover que sea indiferente ir a uno u otro hospital. No debe hacer políticas para que las mujeres queden confinadas a un determinado trabajo, sino que debe promover su plena participación en todos los trabajos. Se trata de distribuir garantías y capacidades para que la gente pueda exigir sus derechos sin que nadie les ande preguntando cuánto comió ayer o cómo tiene conformada su familia.

Aliarse para educar

Durante la historia de nuestra centuria muchas veces el mundo fue declarado en estado agónico y se sentía -como denunciara John Dewey después de la Primera Guerra Mundial- que "la inseguridad y la lucha se han hecho tan generales, que la actitud dominante es de zozobra, de ansiedad y pesimismo".

Adriana Puiggrós

El fin de siglo se veía aún lejos cuando Dewey insistía en señalar que la zozobra era "de lo que pueda reservarnos el porvenir (proyectando) una sombra negra y espesa sobre todas las facetas del presente". Dewey interesó a educadores argentinos democráticos porque reflexionó sobre las posibilidades de capturar ese porvenir mediante la solidaria reconstrucción de una filosofía capaz de ofrecernos la utopía de un futuro. Esa reconstrucción tenía una base pedagógica, finitamente ligada a la producción de solidaridad dirigida a la solución de los problemas comunes.

La sociedad argentina supo establecer acuerdos pedagógicos que fueran más allá de las rencillas de cada presente. Mirándose en el espejo del futuro llamado progreso, se puso de acuerdo en legitimar los fragmentos de educación pública que prosperaban desde la fundación de la República, articularlos y dictar la legislación correspondiente. Fue un acuerdo profundo, más implícito que explícito, consistente en designar a la instrucción pública como el espacio fundamental para la enseñanza, aprendizaje de esa cultura colectiva, que había que seguir tejiendo con tramas nuevas. En la década de 1880 los inmigrantes ya habían comenzado a mandar a sus hijos masivamente a la

escuela pública, junto a los nativos. Se aliaron para integrarse social y culturalmente en forma de ciudadanos de la nación.

La alianza que implica todo acuerdo obliga siempre a dejar elementos propios postergados o fuera del escenario. La identidad de una hegemonía se reconoce tanto por los contenidos que articula como por lo que retorna como fantasma. En el caso de la Argentina, el fantasma de la democracia asoló durante décadas una mentalidad colectiva aterrada por la posibilidad de la disolución social, a la vez que la profundización de la democracia se vio limitada no sólo por el orden impuesto al son de las botas militares desde 1930, sino por elementos autoritarios consolidados en los rituales escolares, en las costumbres y en la moral de la sociedad. La relación entre educación y democracia quedó irresuelta en el sistema educativo argentino.

También el tema de su relación con el trabajo fue mal resuelto por las generaciones que asumieron el proyecto de 1880. El peronismo abrió las compuertas a los trabajadores proporcionando oportunidades de asistencia y de atención curricular a sus necesidades de capacitación laboral. Caido el peronismo, el sistema asumió el ensanchamiento del monto de educandos pero rápidamente marginó la educación para el trabajo.

La alianza para la democracia

Aquel pacto sellado en la década de 1880 se sostuvo cinco años, pero sólo después de la última dictadura militar los argentinos acordaron valores democráticos básicos para educar a sus hijos (por eso, episodios como la discriminación sexual en el Colegio Monserrat de Córdoba o discriminaciones a niños portadores de HIV producen duras polémicas públicas). En el Congreso Pedagógico Nacional de 1985 fue acordada explícitamente la democracia como valor fundamental

de la educación; una idea de sistema escolar federal no fundamentalista sino basado en la articulación de las diferencias regionales, provinciales y locales; el pluralismo, lo no discriminación, el respeto por las minorías y el rechazo de todo autoritarismo, la valorización del trabajo con criterios humanísticos; la conservación del medio ambiente y, sobre todo, el derecho a la participación de la comunidad educativa. Pese a la intervención de sectores ultramontanos y de restos dictatoriales en el desarrollo del Congreso, un pacto político democrático quedó sellado. Pruebas a la vista: el menemismo no pudo eliminar esas conquistas ideológicas. Como el sentido general de los enunciados democráticos era el piso básico del consenso colectivo, el menemismo utilizó estrategias discursivas para limitar el alcance de principios como la gratuidad, la libertad de enseñar y aprender, el pluralismo y, por supuesto, el derecho universal al ingreso, permanencia y egreso en todos los niveles y modalidades de la educación pública.

El menemismo avanzó porque el pesimismo impregnó la sociedad durante casi diez años. La teoría de los dos demonios sumada a las explicaciones y soluciones neoliberales de la hiperinflación produjeron una suerte de parálisis política. Nadie se ataba con nadie y se sentían fuertes tendencias a la desintegración político-cultural. El gobierno de Menem desplegó una pedagogía que impulsó ese movimiento centrípeto. Rompió procedimientos que posibilitaban la articulación de los distintos sectores económico sociales y también barrió las normas éticas de la sociedad, vacío rápidamente ocupado por la ley de la selva. Ante el desgaste de lo público, el menemismo avanzó con un conservadurismo populista incapaz de generar una pedagogía recreadora de la cultura.

Tres leyes pusieron en estado de crisis orgánica al sistema de educación pública: la Ley de Transferencia (que

descentralizó el sistema en momentos de retracción social y pobreza de las jurisdicciones y ha desorganizado la estructura político-administrativa); la Ley Federal de Educación (que impone una estructura que rompe con los niveles tradicionales y desinstitucionaliza modalidades como adultos, especial, inicial, artística, técnica, etcétera y ha desorganizado la estructura académico-pedagógica) y la Ley de Educación Superior (que introduce la ambigüedad en la aplicación de los principios reformistas y los limita, en particular con respecto a la autonomía universitaria y la representación de los claustros). La crisis se produjo porque el gobierno no introdujo un programa que, más allá de la opinión que sus formulaciones políticas nos provocaran, pusiera al sistema en condiciones de educar a la población durante la próxima década. Su déficit fundamental fue su incapacidad de provocar el consenso de la comunidad educativa y de la población, condición para que un proyecto educativo tenga viabilidad. Familias y vecinos, maestros y alumnos, padres e hijos, trabajadores y empresarios, viejos y jóvenes, deben creer en su utilidad (en el sentido profundo del pragmatismo deweiano) para comprometerse, enseñar y aprender. Rotos los vínculos del transmitir y aprender, descalificados los saberes que la sociedad posee, se destruyó el reparo que producía a los argentinos la utopía de una relación esencial entre educación y progreso.

Cuando uno se asoma a las puertas de los organismos gubernamentales se encuentra con un cúmulo de problemas difíciles de resolver que se han incrementado con la deshonestidad, la corrupción y el desprecio por la cosa pública. La dictadura militar bajó la bandera verde para el avance de cierto grado de corrupción que no era típica de los argentinos y propició un clima cultural que ha penetrado las instituciones públicas y privadas. La mediocridad, la desidia, la desesperanza y la incredulidad en las propias capacidades se combinan con un enorme desprestigio de la política. Es muy peligrosa esta situación. Deriva en irresponsabilidad frente a lo público y lo privado y produce

una herencia castradora de las nuevas generaciones. El problema de la dirigencia lo es también de los dirigidos. La cuestión ética - que está atravesada por la política - se ha convertido en un problema pedagógico de primer orden del cual corresponde hacerse cargo a toda la sociedad.

Alianza para un nuevo acuerdo

Es necesario que convenamos sostener entre todos una educación pública de calidad para las nuevas generaciones y que la educación privada complementaria sea suficientemente responsable de su rol social. En momentos en los cuales organismos como el Banco Mundial, alarmados por las impredecibles consecuencias políticas y sociales del ajuste salvaje, plantean correcciones de rostro más humano que beneficien a la salud y la educación, en la Argentina el espacio del neoliberalismo aparece por fin acotado por la perspectiva de un triunfo de las fuerzas democráticas. Son ellas las que tienen la responsabilidad de transformar la educación argentina, con vistas al tercer milenio.

Pero es necesario que la Alianza (UCR-Frepaso) tenga el peso necesario para ocupar el Estado. Su misión es implementar soluciones para superar la crisis de hegemonía, es decir anudar, asociar, vincular lo equiparable de distintas posiciones partidarias e incluso sociales, acercar los intereses comunes, en un marco de respeto por las diferencias. Y ello implica llegar a ser un régimen pedagógico, no solamente tomar unas cuantas medidas de política educativa. Sostener del pacto de 1880 de la educación pública: en la Argentina, como en la mayoría de las naciones modernas, no hay sustituto para el sistema de educación pública, cuya existencia es una de las razones de la existencia del Estado. Reconstruir la relación entre educación y trabajo sobre bases pedagógicas y prospectivas y no convirtiéndola en una fuente de mano de obra gratuita. Profundizar el acuerdo de 1985, ponerle reglas a la práctica democrática de la educación en cada establecimiento educativo y garantizar la autonomía que

el conjunto del sistema debe tener con el gobierno, en el marco del Estado. **Aliarse para garantizar la parte esencial que falta pactar: la igualdad de oportunidades reales para que todos los argentinos puedan estudiar. Sistema educativo vinculación profunda entre la educación y el trabajo creador; conformación democrática de las instituciones educativas; garantías de justicia social en la educación.**

Las fuerzas que constituyen la Alianza para la Justicia, el Trabajo y la Educación poseen la tradición pedagógica democrática, experiencias de gobierno y muchos programas preparados con participación de docentes, estudiantes, técnicos, ciudadanos, en diversas instancias (campañas, equipos técnicos, producción de los intelectuales). La dispersión que caracteriza a las fuerzas políticas democráticas, las luchas sectoriales, las disputas de espacios menores, el persistente intento de penetración en sus filas de procedimientos prebendarios típicos de la moral menemista, habían impedido poner en blanco las coincidencias y las diferencias. Pero quienes hoy nos avergonzamos de un millón y medio de analfabatos, escuelas transformadas en comedores y refugios de chicos inscriptos debajo de la línea de pobreza y tasas mayores del 50 por ciento de deserción de la escuela media, debemos acordar soluciones inmediatas y un régimen pedagógico, que consista en una cultura de la ética y el trabajo.

Con cuidado, deben acordarse los límites del disenso, antes que buscar formas de reducir todas las voces a una única emisión. Eso quiere decir que hay que asociarse bien, asociarse no solamente para ganarle a Menem-Duhalde, ni tampoco para mezclar todo sin otro plan de repartirse los cargos en un asalto conjunto al Estado. Aliarse con aquellos de unas y otras fuerzas partidarias que estén dispuestos a construir una cultura política solidaria es indispensable para que la zozobra deje de ser el lenguaje de los fantasmas y podamos imaginar el futuro más allá de la valla del 2000.

Por un país normal

¿Hablar de Hegel y de *Sittlichkeit* para fundar el voto por la Alianza? Probemos.

José Nun

1 Hace tiempo, la ortodoxia liberal ha instalado en el sentido común una imagen básicamente atomística de la sociedad, según la cual ésta consiste en un agregado de individuos que pueden decidir libremente entrar o no en contacto con otros. Por eso, el mercado y el contrato son las figuras emblemáticas de esta imagen.

Pero, como enseñaba Perogrullo, no nacemos, ni nos criamos, ni crecemos solos. Habitualmente, estamos inscriptos desde el primer día en una familia, en un barrio, en una religión y, después, nos anotan en escuelas, en clubes o en organizaciones parecidas. No hace falta ser sociólogo ni haberse analizado para darse cuenta de que llegamos a adultos con una mochila bastante cargada. Pero, además, durante todo el trayecto, nuestros pensamientos más personales y nuestros sentimientos más íntimos sólo han sido y sólo son articulables mediante palabras, que no únicamente sirven para expresarlos sino que contribuyen en gran medida a darles su significado. Y no hay lenguaje sin una comunidad en cuyo seno éste pueda desarrollarse y transmitirse. O sea que, lo sepamos o no y contrariamente a lo que sugiere la imagen atomística del liberalismo, la cultura está entrelazada en todas nuestras experiencias privadas y, tanto más, en las públicas: para decirlo con Charles Taylor, les da su forma a las primeras y es constitutiva de las segundas.

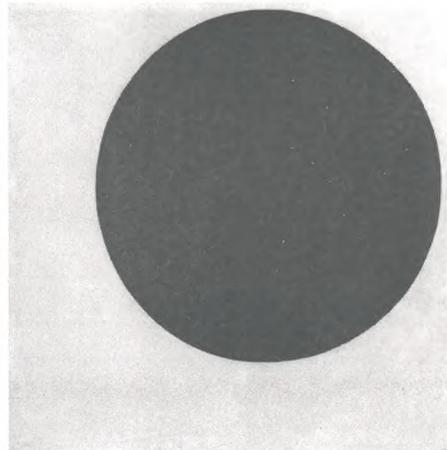
Con lo cual llego a Hegel. Kant había definido a la moral en términos de la obligación que tiene un individuo dotado de voluntad racional de realizar algo que no existe y que debe ser. Hegel le reprocha precisamente haber extraído a este individuo de la comunidad en

que vive y no haber advertido así que hay una ética objetiva que lo precede y que lo incluye y que es definida históricamente por las instituciones, las normas, los usos y las costumbres de esa misma comunidad. Por eso, no se trata en este caso de un "deber ser" sino de un "ser", que se actualiza en las prácticas sociales cotidianas, que trasciende la conciencia del individuo y que establece el "espíritu" de una época.

Es lo que Hegel llama *Sittlichkeit*, para diferenciarla justamente de la *Moralität* individual. Pero da un paso más, rico en consecuencias, que empieza a acercarnos a las elecciones del 26 de octubre: ¿qué sucede cuando en una comunidad se generalizan prácticas que distorsionan sistemáticamente los valores y las normas por las que dice regirse? ¿cuando se va resquebrajando la "ética objetiva" porque las instituciones se alejan cada vez más de los fines para los que fueron creadas? ¿cuando

las palabras (justicia, responsabilidad, igualdad, democracia, etcétera) se vacían de contenido? Crece entonces la alienación y crece en espiral, porque todas las prácticas públicas (en primer lugar, las políticas) ingresan en una zona difusa de sospecha y pierden legitimidad. Se produce de este modo una verdadera crisis cultural, que afecta hondamente a las conciencias individuales y las lleva a buscar fuentes alternativas de sentido para sus vidas. Una de estas fuentes alternativas (típicamente disponible en las sociedades modernas) es un fuerte y descreído repliegue en lo privado, un recurso al individualismo extremo que refuerza el "todo vale", corroe todavía más la solidaridad e intensifica la crisis.

2 Desde este punto de vista, la responsabilidad histórica del menemismo no reside solamente en haber implementado políticas



económicas generadoras de concentración, vulnerabilidad y exclusión. Simultáneamente ha degradado sin miramientos la vida institucional de un país de fragilísimas tradiciones republicanas, que estaba saliendo - apenas e imperfectamente - de muchos años de golpes y dictaduras.

Por eso vale poco comparar hoy nuestras tasas de inflación, de crecimiento del PBI o, incluso, de desempleo, con las de otros lugares de tramas culturales distintas. Ciertamente, no hay ninguna sociedad capitalista donde se haya consumado una *Sittlichkeit* siquiera cercana a la pensada por Hegel, nostálgico de la democracia ateniense. Pero hay varias que, por lo menos y con altibajos considerables, dan ejemplo de una vida pública relativamente normal, con jueces que se esfuerzan por ser imparciales, con sistemas educativos y de salud que funcionan, con elevados niveles de cumplimiento fiscal, con programas sociales que buscan paliar las consecuencias negativas de los procesos de acumulación en curso, con una amplia mayoría de

funcionarios no corruptos, con una razonable división de poderes, con una baja tolerancia cívica ante los conflictos de intereses y los privilegios excesivos, con un énfasis compartido en la previsibilidad de las conductas y en el rechazo a las arbitrariedades, etcétera. Insisto, no me refiero a decaídos de virtud política sino a lo que resulta más o menos normal esperar en términos de las premisas culturales que dan sustento a esas sociedades. Dicho de otra manera, el lenguaje concreto que hablan sus instituciones y sus prácticas disuena con esas premisas pero dentro de ciertos límites, y sin perjuicio de lo discutibles y criticables que sean estos límites.

El menemismo, en cambio, es irrefrenablemente cacofónico por naturaleza; y muchos de sus principales dirigentes son tan insensibles a las disonancias que no disminulan su falta de pruritos republicanos. De ahí que sigan creyendo que alcanzan con esgrimir como blasón la estabilidad monetaria y con descargar agravios contra los opositores para esconder la profunda

crisis cultural que afecta a la Argentina y la enorme responsabilidad que les cabe en ella. De ahí también que hayamos sido conducidos a una situación en que el reclamo por un país normal se ha vuelto una consigna casi revolucionaria.

3 En este contexto enrarecido y aun con todos sus problemas, no hay ninguna duda de que la Alianza apareció como una gran oportunidad. No es que la Argentina haya regresado de la noche a la mañana a un bipartidismo que, de todas maneras, aquí fue siempre problemático; ni se trata tampoco de confundir un acuerdo político - por más importante y extendido que éste sea - con un consenso social profundo, que todavía debe ser construido. Pero ha bastado que se uniesen diversos sectores progresistas en su esfuerzo por contener y derrotar al partido en el poder, para que franjas cada vez más anchas de la ciudadanía respondieran positivamente ante la posibilidad de reemplazar las bases de nuestra convivencia, hoy tan gravemente erosionadas.

Es esta repercusión (que no se mide estadísticamente por algunos puntos porcentuales de diferencia en favor o en contra) el dato más significativo de la hora actual, porque revela que existe todavía una fuerte capacidad de resistencia ante la crisis. Hay una clara voluntad de trazar una línea y de decir "basta" y esta voluntad debe manifestarse en toda su dimensión el próximo 26 de octubre, para franquearle así el paso a un amplio debate nacional en torno al proyecto transformador para el nuevo siglo.

Para volver finalmente a Hegel, si de algo estoy convencido es de que éste no es momento para esos que él llamaba los "hombres de corazón tierno", que critican sinceramente a la sociedad que los rodea pero que no se deciden a actuar por temor a contaminarse. Es gente que cree valer como personas sólo en tanto críticos y que, en el fondo, prefiere conservar aquello que critica porque de este modo mantiene su valor. No dudo de que estarán indecisos y que luchar por un país normal les parecerá una tarea menor.

Documentos

Definiciones económicas de la coalición opositora

El domingo 28 de setiembre, el diario *Página/12* publicó, a título de primicia, el artículo "El modelo '99 de la Alianza", de Maximiliano Montenegro, que aquí reproducimos parcialmente.

El trabajo presenta una síntesis de la propuesta económica de la coalición opositora, documento que se habría decidido no hacer público por imperativos de la campaña electoral. Se indica en el artículo que la elaboración de la propuesta estuvo a cargo de un importante núcleo de especialistas, coordinados por José Luis Machinea: Arnaldo Bocco se ocupó de Presupuesto, Guillermo Rozenwurcel de Comercio exterior, Roberto Frenkel de Mercosur, Pablo Gerchunoff de Em-

pleo, Ricardo Gerardi de Economías regionales, Oscar Quattromo y Enrique Martínez de Pymes y Adalberto Rodríguez Giavarini y Jorge Gaggero de Impuestos.

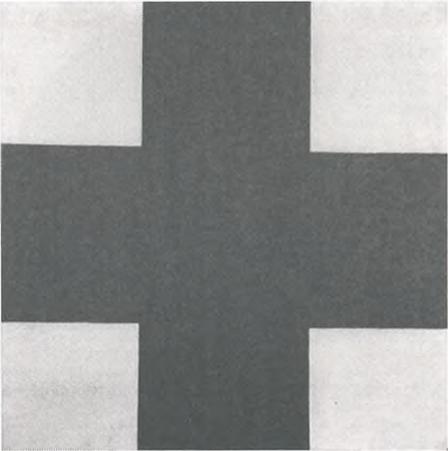
Página/12 afirma que el documento declara "el compromiso de mantener las reglas macroeconómicas básicas: la Convertibilidad con paridad uno a uno entre el peso y el dólar; las privatizaciones, respetando los contratos ya firmados; la apertura comercial y el equilibrio fiscal". Se asegura "que hace falta un sector público capaz de generar políticas productivas, de regular donde no es posible la competencia y de desregular donde es necesario incrementar la competencia". En cuanto a recomendaciones del equipo de economistas, "además de las tarifas y los subsidios para combatir la desocupación, el documento sugiere la regulación del proceso de desnacionali-

zación de la economía: políticas de estímulo a las exportaciones y de resguardo a la producción local, a las importaciones; un instituto especial de asistencia a las Pymes; y la necesidad de coordinar políticas macroeconómicas con Brasil".

De acuerdo con los economistas de la Alianza "la evasión impositiva llegaría a los 25 mil millones de pesos. Y consideran que los planes de subsidios

El Mercosur

"Es necesaria una ventana al Mercosur para corregir las asimetrías" productivas, sostienen en la Alianza. En este sentido, se propicia la creación de instituciones que permitan la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales. En la oposición creen que este tema es fundamental, porque de otro modo no estaría garantizada la estabilidad de los países de la región. Ya lo dijo Machinea recientemente: "No se puede hacer política económica tirando todo el tiempo la llave al fondo del mar", afirmó con relación a que la Argentina no podría aplicar ningún mecanismo compensatorio (como, por ejemplo, una suba transitoria de aranceles) en el caso de que Brasil devaluara su moneda. Esta semana, Rodolfo Terragno viajó a Brasil para entrevistarse con Henrique Cardoso, y la idea sería mantener, después del 26 de octubre, conversaciones directas con el gobierno brasileño para intercambiar opiniones sobre la necesidad de coordinar las políticas económicas.



que propician serían perfectamente factibles, en el corto plazo, con sólo aumentar la recaudación anual en unos 4 mil millones de pesos. Además, afirman que eliminando las ineficiencias del gasto público se podrían liberar otros 6 mil millones adicionales.

Cómo bajar las tarifas

Se dice que "cuidando los marcos legales y normativos vigentes", se debe lograr que las empresas privatizadas bajen sus tarifas. Se siguen dos criterios: 1) introducir más competencia en los sectores privatizados donde no rige la plena competencia (gas, combustibles y teléfonos); 2) regular adecuadamente en otros considerados monopolios naturales (electricidad, agua), controlando que las empresas cumplan con los planes de inversión y los ajustes por eficiencia que deben reducir en menores tarifas para los usuarios.

• Agua potable: habría que renegociar una baja y no una suba de tarifas, como actualmente está discutiendo el gobierno.

• Teléfonos: se remarca que ni la reducción de aportes patronales ni los aumentos de productividad se tradujeron en menores tarifas.

• Electricidad: la idea es facilitar aun más la negociación directa de los clientes de bajo consumo con las compañías generadoras.

• Gas natural: debe instrumentarse una mayor desregulación en el sector.

• Combustibles líquidos: se sugiere promover inversiones en almacenes e infraestructura portuaria para favorecer el desarrollo del negocio de importación de naftas.

Límites a la concentración económica

La Alianza postula "impedir la desnacionalización indiscriminada de la economía". Y se dice que, si bien el aporte del capital extranjero es bienvenido, es necesaria una ley de regulación de fusiones y adquisiciones similar a la que rige en Estados Unidos y Canadá. En tanto, se propician límites a la desnacionalización en energía nuclear y medios de comunicación. La aprobación de las adquisiciones empresarias estaría sujeta al control antimonopolístico. En este sentido, tendría un rol clave el Tribunal Superior de Defensa de la Competencia, que actualmente está en estudio en el Parlamento dentro de la nueva Ley Antitrust.

En cuanto a la defensa del consumidor se promoverá:

• Posibilitar que las asociaciones de consumidores puedan representar el derecho

difuso de los consumidores, no sólo ante los entes regulatorios sino también ante la justicia.

• Cuidar la autonomía, profesionalización y agrupación por especialidades de los entes reguladores de servicios públicos.

• Institucionalizar la presencia de los usuarios en los entes reguladores, creando la figura de un "defensor del usuario", persona que sería designada por las asociaciones de usuarios.

Los economistas de la Alianza piensan en un caso paradigmático que involucra, simultáneamente, defensa de la competencia y del consumidor. Se trata del mercado de AFJP, para el cual propiciarían establecer un límite al proceso de concentración. Argumentan que si no es así, unas pocas AFJP van a terminar regulando las comisiones de manera colusiva, recargándoles un sobreprecio a los afiliados.

Estímulo para el empleo

El documento dice que a mediano plazo la reducción del desempleo se logrará si -y sólo si- se alcanzan tasas de crecimiento superiores al 6 por ciento anual, se incentiva el desarrollo productivo de las Pymes y se impulsa una revolución educativa. Pero para el corto plazo propone una serie de medidas que se financiarían con los recursos provenientes de la disminución de la evasión y la mejora en la eficiencia del gasto público:

• Un subsidio para 200 mil jóvenes de hogares humildes para que finalicen el colegio secundario. Actualmente, sólo el 14 por ciento de los jóvenes de hogares de bajos ingresos termina la secundaria. Se estima que el costo de este programa sería de

200 millones por año.

• Reducción de aportes patronales para estimular la contratación de trabajadores no calificados. La baja de aportes se otorgaría a las empresas con menos de 25 trabajadores y sobre un salario máximo de 200 pesos. El costo de esta medida -evalúan en la Alianza- sería de 400 millones de pesos al año.

• Bono para la reconversión y entrenamiento de los jefes de hogar desocupados. Apunta a asistir a 200 mil jefes de hogar con subsidios entre seis meses y un año, período durante el cual cumplirían un programa de entrenamiento laboral de cuatro horas diarias. El costo del programa se calcula en 400 millones de pesos al año.

Concertación chilena: génesis y perspectivas

Contrariando la historia y la mayoría de los pronósticos fue posible constituir en Chile una coalición de partidos que ha realizado grandes tareas y ha tenido la virtud de la estabilidad y la permanencia en el tiempo. El itinerario de este proceso es conocido, pero no por eso menos sorprendente.

Carlos Ominami P.*

Un conjunto de fuerzas que vivió en condiciones muy difíciles de división y persecución durante los primeros años de la dictadura se transformó en la gran fuerza que le dio dirección política a la lucha en contra del régimen de Pinochet. Posteriormente derivó en una alianza electoral que condujo a la primera magistratura a Patricio Aylwin y luego al actual presidente Frei. Hoy día la Concertación constituye la principal fuerza de gobierno del país.

Los resultados de este proceso son reconocidos como excepcionales haciendo posible un proceso de transición realizado en el interior del esquema definido por el propio gobierno militar. Esto representa una diferencia muy sustancial con otras transiciones, particularmente con la argentina, donde el aspecto determinante es la derrota política y también militar de las Fuerzas Armadas, situación que no se produjo en Chile.

Durante los últimos siete años se han ido consolidando las instituciones propias de la democracia representativa: un gobierno de mayorías, el Parlamento y las libertades propias de un sistema democrático.

En el campo económico -el que parecía el frente de acción de mayor vulnerabilidad para el sistema democrático- los resultados han sido particularmente promisorios. Chile ha cre-

cido en estos años de democracia más que en cualquier otro período de su historia, con una tasa de crecimiento superior al 6 por ciento, lo que nos ubica a la vanguardia del dinamismo económico regional. El rápido crecimiento ha permitido llevar los niveles de desempleo a tasas no superiores a 6 por ciento; se ha mejorado sustancialmente la inserción externa por la vía de un vigoroso proceso exportador y en un lapso de diez años Chile ha conseguido duplicar su ingreso *per cápita*.

Son también notables los avances que se han registrado durante estos últimos años en materia de lucha contra la pobreza. De un 40 por ciento de población en condiciones de pobreza hacia finales de los 80, este porcentaje había bajado hacia finales de 1996 a un 25 por ciento. Esto significa que cerca de la mitad de los chilenos que vivían en esa condición a finales de la dictadura han logrado superarla durante los primeros siete años de democracia.

La estabilidad mostrada por la coalición es igualmente sorprendente dada la naturaleza del régimen político existente en el país. Efectivamente, un régimen de presidencialismo exacerbado como el que existe hoy día en Chile es el menos propicio para la generación de alianzas amplias y estables. La Presidencia de la República constituye una instancia demasiado poderosa, sin que existan los contrapesos susceptibles de asegurar una distribución más equitativa del poder entre los distintos componentes de la coalición. No obstante eso, la alianza se ha mantenido y busca proyectarse hacia el futuro.

Desafío de la historia

A la luz de la historia precedente, todo lo anterior suena como ciencia ficción. Dadas sus configuraciones ideológicas y sus trayectorias políticas, el centro y la izquierda tendían en Chile a repelerse mutuamente. Unirlos era casi como juntar el aceite con el vinagre.

Efectivamente, la Democracia Cristiana se constituyó en Chile como una opción claramente alternativa a la representada por la izquierda. En confrontación también con la derecha tradicional, la Democracia Cristiana se caracterizó históricamente por su dificultad para generar alianzas y su tendencia, en consecuencia, al camino propio. La expresión máxima de esta tendencia fue el gobierno de Frei Montalva, entre el 64 y el 70, cuando la Democracia Cristiana gobernó en solitario.

La historia entre la Democracia Cristiana y la izquierda es esencialmente una historia de fuertes confrontaciones y de enormes incomprensiones. La izquierda, en su oportunidad, no entendió la vocación progresista de muchas de las formulaciones que dieron vida a la Democracia Cristiana y fue así como se constituyó en una opositora sin tregua al gobierno de Frei Montalva, al que desde el principio le hizo presente que le negaría "la sal y el agua".

La Democracia Cristiana, a su turno, se constituyó en una violenta opositora al gobierno de Salvador Allende y terminó siendo arrastrada a la conformación de un frente de acción conjunto con la derecha, el que se transformó luego, objetivamente, en la fuerza de apoyo social y político del golpe de Estado.

Los intentos a finales de los 60 de generar una alianza entre centro e izquierda no pasaron de ser apelaciones líricas que tuvieron muy poco fundamento. Tampoco tuvieron, en su ocasión, gran relevancia las voces disonantes de algunos dirigentes de la Democracia Cristiana que en el momento del golpe de Estado proclamaron su apego al estado de derecho y rechazaron categóricamente el golpe militar. La verdad histórica es que la gran mayoría de la Democracia Cristiana estuvo en un lado claramente opuesto al de la izquierda en ese momento.

Fundamentos de la coalición

Una vez que quedó claramente establecido que la dictadura militar, concretamente a lo que había anunciado, no tenía plazos sino metas y que, por tanto, tenía vocación de permanencia en el tiempo, se comenzó a plantear la posibilidad de la reagrupación de todas las fuerzas democráticas. Este fue un proceso largo, que demoró casi diez años en entregar sus primeros frutos. El principal estímulo a la constitución fue el convencimiento de la incapacidad de cada una de las fuerzas, individualmente consideradas, para protagonizar una confrontación exitosa en contra de la dictadura.

En la medida en que este sentimiento fue extendiéndose, posibilidad también la construcción de acuerdos en diferentes ámbitos. En el académico, donde la proliferación de centros de estudio y organizaciones no gubernamentales permitió el intercambio y el encuentro de intelectuales que históricamente no habían tenido ningún tipo de diálogo. Las convergencias intelectuales y académicas fueron, a su vez, un insumo importante para posteriores acuerdos programáticos.

En el ámbito social, los esfuerzos de recomposición de las organizaciones permitieron el encuentro de las distintas vertientes del espectro democrático. Se fue así constituyendo una trama de múltiples relaciones que permitió finalmente en 1983 su cristalización política en la Alianza Democrática, entidad que agrupó por primera vez de un modo formal a la Democracia Cristiana con parte de la izquierda.

Ayudaron también a este proceso la fuerte presión internacional sobre la dictadura y la promoción de la unidad opositora que protagonizaron las principales fuerzas políticas que operaban en el escenario internacional: la Socialdemocracia, la Democracia Cristiana Internacional y el propio bloque socialista.

El papel crucial del socialismo

Pero habría sido difícil avanzar de manera decisiva en la constitución de

una alianza sólida si no se hubiesen producido trascendentales cambios en el interior de la izquierda, concretamente el proceso de renovación del socialismo.

Un socialismo ortodoxo, alineado con la URSS y el campo socialista, sostenedor de las viejas ideas de dictadura del proletariado y economía centralmente planificada, no habría podido -por mucha voluntad que tuviera- ser parte integrante de una alianza con la Concertación. El Partido Comunista de Chile es una buena demostración de la afirmación anterior. Antiguamente un gran partido de masas con fuerte presencia en el movimiento obrero, la intelectualidad y las clases medias, por su incapacidad para renovarse y su seguidismo a la Unión Soviética termina transformado en un partido con poca gravitación y totalmente inviable desde el punto de vista de su participación en alianzas amplias.

El proceso de renovación socialista fue complejo y doloroso a tal punto que hizo estallar, hacia finales de la década del 70, al viejo socialismo en

diferentes grupos de los cuales los dos más importantes se enfrentaron durante años en una violenta pugna ideológica. Unos defendiendo las posiciones ortodoxas cercanas al comunismo y otros asumiendo la responsabilidad de una renovación profunda del socialismo, promoviendo su encuentro con sus orígenes libertarios y humanistas.

En la actualidad, la renovación ha llegado a ser un patrimonio común de un Partido Socialista reunificado y convertido en un componente fundamental de la alianza de gobierno.

Desafíos futuros

Nada más alejado de la realidad que la descripción de este proceso como una suma de convergencias y la ausencia de conflictos. Por el contrario, las tensiones han acompañado permanentemente al conglomerado, en algunas oportunidades de manera dramática, por ejemplo a propósito de temas tan delicados como los Derechos Humanos.

Las tensiones más difíciles de resolver son, sin embargo, las que resul-

tan de la necesidad de definir la constitución interna de la Concertación. Descartada la idea de una alternancia fundada en un acuerdo político al margen de la soberanía popular, lo único que corresponde es la definición de un mecanismo amplio y democrático de resolución de sus liderazgos. Un aporte importante en esta dirección fue el acuerdo que permitió en 1993 la realización de elecciones primarias en las que resultó vencedor Eduardo Frei Ruiz Tagle, actual presidente de Chile.

El tema hoy vuelve a cobrar vigencia. Sin duda los próximos meses serán difíciles para la coalición, porque necesariamente tendrá que ponerse de acuerdo en la búsqueda de un mecanismo que permita nuevamente disminuir la cuestión presidencial.

La base para ello está, sin embargo, acotada. El mecanismo tendrá que significar un claro avance en las formas de participación democrática que ya se gestaron en 1993. Esto es así porque hoy el pueblo concertacionista -que no reconoce filas en ninguno de los partidos de la coalición- es cada vez más amplio y, por tanto, corresponde que juegue un rol fundamental en la definición del candidato único de la coalición.

Con todo lo difícil que esto pueda ser, tengo confianza que logremos encontrar una solución adecuada. Todos sabemos que al margen de la coalición ninguna fuerza tiene destino, que una política de cambios requiere de una alianza mayoritaria y que con una derecha todavía ampliamente dominada por la nostalgia pinochetista la única alianza posible es la que han protagonizado hasta ahora el centro y la izquierda.

Para continuar avanzando es fundamental que la coalición, junto con ser capaz de culminar exitosamente el proceso de transición a la democracia sea también capaz de empujar con fuerza el conjunto de tareas modernizadoras que el país requiere. Ese es el desafío que tenemos por delante.

Nota

* Senador Socialista, República de Chile.

Uruguay: la izquierda a fin de siglo

La senda del catch-all party, entre la oposición y el gobierno

Jorge Lanzaro*

El presidencialismo de coalición y la reforma electoral en un sistema partidario plural

Las elecciones de 1994 dejaron un saldo impactante: la división de los votos en tres tercios, con los competidores mayores casi empatados y un cuarto grupo que consiguiera su cuota, en un esquema que confirma la pluralidad partidaria que se viene perfilando desde 1971 y refleja el crecimiento sostenido que experimenta la izquierda en los últimos treinta años.

El Partido Colorado gana con el 32,2 por ciento de los votos, los "blancos" del Partido Nacional salen segundos con el 31,2 por ciento, el Frente Amplio (FA) -componiendo la fórmula del Encuentro Progresista- llega al 30,6 por ciento y el reciente Nuevo Espacio, un desprendimiento de la izquierda, de orientación centrista, consigue un 5,2 por ciento. El FA aumenta de manera significativa su cota a nivel nacional (18,3 por ciento en su estreno de 1971, algo más del 21 por ciento en 1984 y en 1989). Triunfa en Montevideo por segunda vez, con mucha comodidad (44,1 por ciento) y duplica prácticamente su presencia en el interior (19,5 por ciento, contra alrededor del diez por ciento en las tres elecciones anteriores).

La primera respuesta a este acontecimiento ha sido igualmente inédita y relevante. El presidente Sanguinetti, que en las urnas obtuvo una ventajosa escueta, de minoría mayor, inicia su segundo mandato con el armado de una "gran coalición", que comprende a todos los sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional, con un pacto programático que se traduce en la composición del gabinete ministerial, en la designación de los cuadros superiores de la administración, en la procesalidad

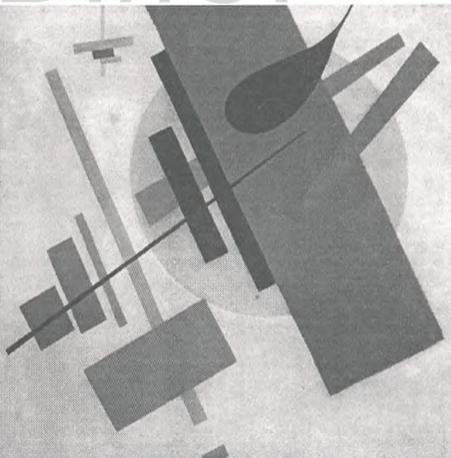
de las decisiones políticas y de los andamientos parlamentarios.

Este acuerdo -ante el cual el Frente Amplio queda como tercero en discordia- suministra un marco de amplitud para las tratativas de gobierno y encauza la negociación de una agenda de reformas ambiciosas, que toca a los nudos cruciales del ciclo actual de modernización: incluyendo materias en las que ha habido progreso durante las dos administraciones anteriores, abriendo la posibilidad de avanzar en otras, cuyo tratamiento se demoró o fue "bloqueado".

El país afronta de esta manera otro "ajuste" y trata de apurar la reestructuración de su modelo de desarrollo, insistiendo en los rumbos de política económica, encarando la reforma de la educación y de la seguridad social, extendiendo la reforma del Estado, la reconversión productiva, la "apertura" y la integración regional.

Este experimento de "presidencialismo de coalición" se puso en práctica sin que hubiera modificaciones en las instituciones vigentes, extremando simplemente los recursos de una composición pluralista secular. Es una novedad mayúscula, pero supone asimismo una continuidad en las culturas vanguardistas del pluralismo -de nuestro peculiar "presidencialismo de compromiso"- que se asienta en un juego nutrido de transacciones entre fracciones de los dos grandes partidos tradicionales, da lugar a la "coparticipación" en las jerarquías superiores del Estado y reconoce incluso otras fórmulas de coalición en régimen presidencial, de calibre y visibilidad diversa.

Tras ello se da impulso a una reforma constitucional. A la luz de los resultados parejos de los comicios de 1994, la ruptura del bipartidismo tradicional y las expectativas -para unos "amenazantes"- que genera el ascenso de la izquierda frenteamplicista, entramos en



un nuevo capítulo que va a desembocar en la reforma de 1996, ratificada mediante plebiscito, por una mayoría más que ajustada.¹

En lo que es su designio fundamental, la reforma refuerza la figura presidencial y busca promover la construcción de mayorías, que puedan brindar más apoyo a las candidaturas y, consecutivamente, a las gestiones gubernamentales.

El articulado agrega facilidades para hacer valer los votos presidenciales en el proceso legislativo y aligera el trámite de las "leyes de urgencia". Pero se centra sobre todo en el régimen de elección del presidente. Establece la candidatura única por partido, mediante elecciones internas simultáneas, a realizarse a padrón abierto y con participación voluntaria. Quedan eliminados a este nivel algunos elementos típicos de la "ley de lemas", como el "doble voto simultáneo", la multiplicidad de candidaturas de un mismo partido y la acumulación de sufragios entre ellas. Se instaura además el *ballottage*, con segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas, para el caso de que ninguna alcance en la primera cita el 50 por ciento del sufragio. En la vuelta inicial se vota conjuntamente la presidencia y el Parlamento. En el segundo turno se disputa solamente el cargo presidencial.

En 1999 tendremos una zafra electoral nutrida: las internas de todos los partidos en abril, las parlamentarias y la primera vuelta presidencial en octubre, más la posibilidad de una segunda vuelta presidencial, en noviembre. El nuevo presidente asumirá en marzo del 2000, poco antes de las elecciones municipales, que hasta ahora se hacían en junto con las nacionales y en adelante se cumplirán en forma separada, aunque consecutiva, en el siguiente mes de mayo.

El estatuto sancionado mantiene la representación proporcional "integral" para la elección legislativa -que ha sido uno de los pilares del sistema uruguayo- pero se aparta del principio de pluralidad que regía la elección presidencial. Con las nuevas reglas, esta carrera ha de transcurrir en términos más concentra-

dos y sobre bases mayoritarias. El diseño ordena la competencia en torno a un menor número de figuras y de opciones políticas, queriendo promover la hecatura de coaliciones electorales, que podrían a su vez proyectarse como coaliciones de gobierno: en las internas de cada partido, en el apronte de la primera vuelta y para enfrentar virtualmente el *ballottage*, como articulación habilitante de la presidencia, en un juego que llegaría a condicionar los alineamientos parlamentarios.

La nueva fórmula constitucional puede servir para prolongar la textura pluralista y la política de compromisos, insistiendo en la formación de coaliciones, electorales y de gobierno. Como eventualidad, abre también una alternativa de vocación plebiscitaria, con un presidente electo por el régimen de mayoría -de entrada o en *ballottage*- frente a un Parlamento electo definitivamente en la primera vuelta, sobre la base de la representación proporcional estricta y reflejando el mapa pluripartidista existente. Aunque la primera hipótesis es la más probable dentro del cuadro actual, ambas ecuaciones son posibles y serán puestas a prueba en las elecciones de 1999, justo cuando la izquierda tiene la oportunidad de concursar por el gobierno.

En efecto, hoy por hoy, en una tendencia que se muestra firme, las encuestas ubican al Frente Amplio a la cabeza de las listas de preferencias y Tabaré Vázquez su candidato cantado aparece con posibilidades de ganar en la primera vuelta, con porcentajes de popularidad o de intención de voto considerable, que distan sin embargo de la mayoría absoluta.²

En todo caso, los saldos de esa competencia y las chances del *ballottage* dependen mucho de cómo se desenvuelva en su momento la campaña electoral, del perfil de los candidatos blancos y colorados, que recién han de definirse en las primarias de 1999, del desempeño y las convergencias de los dirigentes y de los votantes de las divisas tradicionales y de la izquierda no frentista, que si Vázquez llega realmente a la segunda vuelta, para enfrentarlos tendrá que sumar voluntades por enci-

ma de las fronteras de partido.

El resultado depende también de la oferta política que el Frente Amplio y su candidato logren articular de aquí acá, de la ampliación de su convocatoria y de su capacidad para tender puentes con otros sectores partidarios. Sus acumulaciones se asientan en los últimos tiempos en una lógica dual, en la que se combina una oposición más o menos acérrima, el carisma personal de Tabaré Vázquez, las pruebas de la administración de Montevideo, así como la presencia de sectores y figuras de sesgo moderado (el general Seregni, el actual intendente Arana y, con vaivenes, el senador Danilo Astori y el propio Tabaré Vázquez).

De más en más, la escuadra tiene que mostrarse a sí misma como una opción efectiva de gobierno a nivel nacional y como opción efectiva de compromiso, en un horizonte pluralista, de tres conjuntos partidarios competitivos y un cuarto actor que puede intervenir como minoría decisiva.

De la adscripción corporativa a la izquierda "nacional y popular"

La ubicación actual de la izquierda uruguaya es el resultado de una metamorfosis de envergadura, que lleva casi cuatro décadas.

En la época del segundo batallismo, que se inicia en los años 40, la izquierda se conforma con "partidos de ideas", que tienen una audiencia electoral muy baja y practican un oficio "testimonial" o de "picana", subordinado a la collera de blancos y colorados. Al mismo tiempo obran como núcleos significativos de integración social, con un dominio sindical robusto y creciente. En clave ciudadana y a través de las redes de clientela, los partidos tradicionales se llevan la inmensa mayoría de los votos. Pero la dirección de los gremios queda en manos de la izquierda, que a raíz de ello obtiene puestos estratégicos en los organismos tripartitos de regulación del salario y de administración de la seguridad social, accediendo a una suerte de "coparticipación corporativa".

En la década del 60, con la crisis del Uruguay "batallista", asistimos a la "na-

cionalización" de la izquierda (en el sentido de Gramsci). El proceso implica una reformulación ideológica -que remonta la agilidad de los discursos precedentes- y pasa por dos puntos: extendiendo los arribajes corporativos y las formaciones de partido, en una incursión que mejora las salidas electorales.

El movimiento sindical se unifica en torno de una plataforma que excede las reivindicaciones particulares, operando como agente de convocatoria "general" y cuerpo de organización política, con vuelo propio y como "público orgánico" de los experimentos "frentistas" de la izquierda. Estos desembocan finalmente en la fundación del Frente Amplio en 1971: una coalición "nacional y popular" algo inaudita, llamada sin embargo a perdurar, que une a los veteranos de la izquierda (socialistas, comunistas, independientes), con la democracia cristiana y sectores desprendidos de los partidos tradicionales. En fase de contraposición y de enlace, surgen los Tupamaros y otros "focos" de acción armada.

En esas gestas la izquierda hace sus primeros pininos de "tradicionalización", empieza a admitir el juego de "personalidades", recurre sin pudores al mecanismo de "ley de lemas", que tanto había denostado, y usa los arbitrios comunes de la competencia electoral, abriendo una brecha en el año bipartidismo dominante. El general Seregni, candidato unitario en el estreno de 1971, que va probándose como dirigente en las vicisitudes siguientes y en resistencia a la dictadura, es en este sentido una figura emblemática.

Estos avances se ven envueltos en una polarización creciente, en un curso alimentado por tirios y troyanos, que descompone el sistema de partidos, la cultura negociada y los códigos de lealtad. La izquierda queda atravesada por emergencias que desconocen el pluralismo y militan en un jacobinismo abrupto, adentrándose en una lógica adversativa, con cierto menosprecio por las reglas de una democracia "formal", que pasa por una fase de deterioro y terminará sufriendo una ruptura "catastrófica".

Un partido de "nuevo tipo" en un sistema que cambia

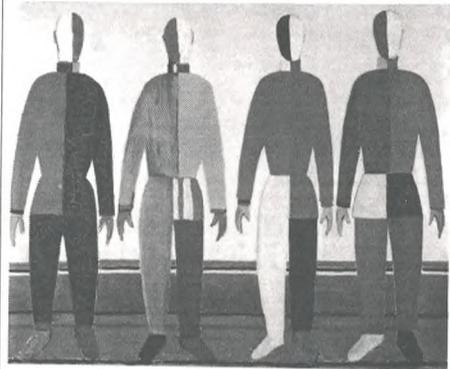
En la transición que comienza en 1980 se confirma el realineamiento del sistema y la izquierda ratifica su presencia, deduciendo una terciaría de relevancia: gracias a su papel en la recuperación democrática y a su performance electoral, en virtud de una transformación sustantiva y por la posibilidad de incidir en los procesos de decisión política.

En las elecciones de 1984, que inauguraron el ciclo posautoritario, el Frente Amplio sacó el 21,3 por ciento de los votos sumando tres puntos a su votación inicial de 1971 (que había sido de 18,3 por ciento). En Montevideo, donde tiene la mayor audiencia, superó su marca previa (30,1 por ciento), llegando al 33,7 por ciento.

En la víspera de los comicios de 1989 se produjo la cesión del Nuevo Espacio, constituido por grupos del ala más centrista.³ A pesar de ese corte, el Frente Amplio ganó la intendencia de Montevideo (con el 34,5 por ciento de los votos del departamento) y mantuvo su cuota a nivel nacional (21,2 por ciento). El Nuevo Espacio consiguió por su lado el 9 por ciento en todo el país

y el 13 por ciento en Montevideo.

Asistimos a un proceso de "integración" favorecido por el espíritu "inclusivo" con que se encaró inicialmente la reconstitución del sistema político, lo que lleva a remontar los desgarramientos precedentes y restablece las ligaduras nacionales. La izquierda acentúa su "tradicionalización" en un esquema que la hace "parcerse" y "diferenciarse" de las divisas históricas, afirmando su identidad propia dentro de un cuadro de oposición acotada, de cierta "trivialización" de la competencia y de los conflictos, sin la amenaza de un vuelco "radical". La falange frentista participa en las negociaciones y de manera especial, en el Pacto del Club Naval, que permiten salir de la dictadura. Aunque sus distintos sectores tiran desparejo, registrándose alibajos, repliegues y tamos a la deriva, una vez en democracia, la izquierda entra de lleno a las arenas públicas, interviene en su manera en las alternativas políticas, pesa en los juegos de "bloqueo" y también en algunos compromisos. Adelanta asimismo en los experimentos de gobierno a nivel municipal, en los trabajos parlamentarios y durante el primer mandato de Sanguinetti, a través de la coparticipación en directorios de empresas públi-



cas: con algunos tropiezos y ademanes de arrogancia en una gestión que resulta empero razonable y provee novedades aportando su sello y cobrando legitimidad.

Este progreso se vincula con la aparición de nuevos liderazgos, la rotación ideológica y un derrotero político relativamente moderado. Es un momento de inflexión: en el que están vencidas las antiguas certezas y las claves de doctrina. Los asentamientos históricos, la "nacionalización" iniciada en los 60, los lugares obtenidos en la resistencia, en la transición y en la democracia restaurada permiten sortear los efectos que de otra manera pudo tener el "derrumbe" del socialismo real. Las lógicas militantes tienden a ser desplazadas por la competencia electoral. Se mantiene con otra autonomía: la "hermandad" con los sindicatos. No obstante, los públicos "orgánicos" y la *classe gardée* dan paso a la apelación ciudadana y a una nueva fisonomía de conglomerado popular, asuntuando los perfiles de *catch-all party* que aparecieron antes de la dictadura.

Se van conformando en este viaje un partido de nuevo tipo, con una articulación mutante, en la que encajan varias familias políticas y compiten posturas diversas. Lo que en el origen se constituyó como una coalición de partidos (un "frente" integrado), ha pasado a ser un partido de coalición y en buena medida un partido unificado, en el que las piezas componentes, algunas viejas y varias nuevas, nacidas como gajos frente-ampliadas, aunque guarden sus nombres, ya no constituyen partidos autónomos, sino sectores de un conglomerado complejo con su identidad propia y las marcas de la biografía histórica, pero en semejanza con lo que ocurre en cualquier otro conjunto partidario.

Esta transformación va acompañada de cambios en el arco de unidades constitutivas, la ruptura del Partido Comunista -que tiene consecuencias muy importantes-, el desprendimiento de sectores de centroizquierda y a su vez la aparición de fracciones relevantes, una modificación significativa en la estructura de liderazgos: en la que sobresalen y compiten las cabezas de los grupos, las jefaturas personales, el mando del con-

junto, con un "caudillismo de izquierda" que ha pasado por una sucesión de figuras y de estilos muy distintos.

El general Seregni -que se ganó las jinetas de los lanzes del 70 y con casi diez años de prisión en las cárceles de las dictaduras- representa como nadie la evolución que arranca en la década del 80 convirtiéndose en un puntero de la integración democrática y de la proyección de la izquierda como actor nacional, en una sintonía que debió combinar la construcción partidaria y los equilibrios del Frente Amplio -un bordado interno paciente y complicado, que muchas veces atrapa y paraliza- con el desarrollo político y la participación en los procesos decisivos, la aspiración de llegar al gobierno y las prácticas del compromiso.

Tabaré Vázquez toma el relevo, al principio en convergencia con Seregni, luego compitiendo con él, en una *performance* de tonos diferentes, en otra fase del Frente Amplio y en otra fase del país que se extiende, sin embargo, sobre líneas de continuidad. Es un líder de carisma personal, pragmático y ubicuo, decidido y eficaz, con dones de mando y de arbitraje, que demostró capacidad, autonomía y moderación en los ejercicios inaugurales de la administración capitalina y se entrenó en campañas exitosas, que encarna y transmite como nadie la creencia en el triunfo -tanto para sus partidarios como para sus opositores-, obrando sobre todo como candidato a ganador, que juega fuerte y que expasera a los adversarios. Como Seregni, y más que Seregni, aunque pertenece originariamente al Partido Socialista, luce como personalidad común del Frente Amplio y hacedor del Encuentro Progresista, cultivando su condición dual (de *outsider-insider* ante la profesión política), cosechando poderes y adhesiones en las estructuras partidarias y por encima de ellas, obteniendo su caudal electoral propio y haciéndolo valer, con una situación "populista" y apelaciones de corte "plebiscitario".

Lógica de oposición y lógica de gobierno

Con estos trazos, la izquierda llega

a disponer de un "piso" considerable y alcanza una audiencia electoral que la coloca en carrera para 1999. No obstante, las expectativas de futuro encuentran problemas a resolver, que nacen precisamente de las formas en que se ha ido dando el desarrollo. Las claves de prosperidad albergan en sí mismas ciertas dificultades.

Un nudo mayor está en el manejo afinado de los dos componentes de la acción política: la lógica de oposición y la lógica de gobierno. Cosa que le ocurre a cualquier partido, pero que en el caso de la izquierda resulta más problemático, en virtud de su historia y de su propia configuración, porque supone un debut trabajado, dado el énfasis de sus posturas y el cariz de la escena nacional, las resistencias que despiertan sus códigos de expansión.

En esta línea hay por lo menos tres cuestiones enlazadas. Primero, la necesidad de armar su oferta política, en un contexto de competencia muy cerrada y en un tiempo de aceleración de los procesos de reforma estructural con los partidos tradicionales, llevando desde hace rato la delantera. Lo que requiere una dosis extraordinaria de innovación y no deja demasiado margen de maniobra, ni tolera muchos artículos de promesa. Segundo, la necesidad de reformular la estructura partidaria, los ejercicios de disciplina, la composición entre sectores más radicales o más moderados, afirmando la primacía que éstos pueden tener, para acomodar el conjunto a los requerimientos de una conducción ágil, dotada de autonomía, de consistencia y de credibilidad. Tercero, la necesidad de conseguir puntos de apoyo entre los cuadros dirigentes y los votantes de los demás partidos, para poder ganar y, llegado el caso, para poder gobernar.

Por varios años las tribulaciones frentistas han girado en gran medida en torno a estos ejes -centrándose en la posibilidad y en las formas distintas de encarnar la lógica de gobierno, aun desde el llano- incluyendo la "fuga" de sectores centristas, la rivalidad sobresaliente entre Vázquez y Astori, cruzada con una disputa por el cetro entre Vázquez y Seregni, que lleva al general a renun-

ciar a la presidencia del Frente Amplio (en febrero de 1996, el día que se festejaban los 25 años de su fundación).

Una reciente elección interna modifica el mapa de fuerzas y puede favorecer el dominio de Vázquez, a nivel de aparato, dentro del círculo de militantes y el círculo de adherentes. Pero no resuelve las cuestiones planteadas y deja en pie los interrogantes acerca del diseño político. En particular, queda pendiente el problema de la construcción de mayorías, para la elección nacional y para un eventual gobierno. Lo que supone un hilado de propuestas conducentes y difícilmente podrá hacerse sin despegarse de cierto "intermismo" que el propio Vázquez se ha encargado de denunciar y sin el concurso de otras voluntades.

Con la Constitución anterior el Frente Amplio tenía posibilidades de ganar solo. Después de la reforma de 1996 esa posibilidad se ha hecho ex profeso más difícil, sin remota. Por lo demás, dado el arco de pluralidad existente, ni ahora ni antes, un partido está en condiciones de gobernar por su cuenta, sin compromisos o coaliciones.

Algunos abrigan una ilusión mayoritaria -con esos sentidos de la "hegemonía" que la izquierda aún arrastra- y el mismo Tabaré Vázquez alardeó en un momento con ganar de plano en la primera vuelta. Esto es bastante improbable. Lo que es posible -si las tendencias actuales se mantienen- es que la izquierda frentista entre en el *ballottage*. En tal caso tendrá que lidiar con contrincantes de los partidos tradicionales.

Para que uno de ellos corra con chances debe imponerse en las primarias de su partido puesto que -a diferencia de lo que ocurre en el Frente Amplio- hay en esas tierras varios candidatos internos. Con miras a la primera y a la segunda vuelta presidencial, debe ser además capaz de juntar bien a los suyos y de hacerse del voto "flotante", con un trasiego de las adhesiones de blancos y colorados. Esto ha ocurrido en elecciones anteriores y tiende a ampliarse, con el incremento de la movilidad ciudadana, pero ahora debe darse en forma extensa y con el movimiento de la segunda vuelta, que es una

novedad absoluta, añadiendo eventualmente votantes del Nuevo Espacio.

Tabaré Vázquez tendrá que hacer otro tanto, apostando a que los votos del Nuevo Espacio se dividan y lo acompañen lo más posible en la segunda vuelta, captando asimismo "flotantes" y "mutantes", de la primera a la segunda vuelta, en la franja de disputa con los partidos tradicionales. El estilo de liderazgo y el tipo de oposición que ha practicado en los últimos tiempos, subrayando las diferencias y las críticas, marcando distancia con los otros tres conjuntos, sobre todo con los partidos tradicionales -que multiplican por su lado las muestras de hostilidad- tiene ventajas, pero tiene también inconvenientes. Le ha servido para hacerse fuerte en el Frente Amplio y le ha servido para ubicarse primero en la tabla actual de preferencias: como el tercio mayor entre blancos y colorados -que serán competidores agguerridos- y a uno cuantos cuerpos del Nuevo Espacio (que con oscilaciones tiende a mejorar su marca de 1994 y ronda al día de hoy por el 6 por ciento a nivel nacional). Hay que ver en qué medida le sirve y cómo corrige el tiro, para arrimarse a la meta. Ya lo ha empezado a hacer, tratando de dominar el frente interno y de mejorar la audiencia externa, en una tarea para la que importa el contacto con algunos núcleos estratégicos (empresarios, medios de comunicación, fuerzas armadas) y el relacionamiento con los otros partidos, que habrá de ser competitivo pero ha de dejar tendidos algunos puentes. Ello supone un cambio de tónica, el alza de la moderación frentista, la reposición de hombres y sectores que en la subida quedaron escorados. Son fajas en las que Tabaré Vázquez puede mostrar sus destrezas. Pero no resultarán fáciles, exigen verosimilitud, exigen centidumbre y el tiempo no sobra.

En los comicios de 1999 el cuerpo electoral quedará dispuesto en "bloques", según sostienen algunos, en "familias ideológicas". Al acceder a la etapa de gobierno, el mapa legislativo establecido en la primera vuelta pondrá sobre el tapete la pluralidad partidos y fracciones. Para no quedar cercado y evitar polarizaciones peligrosas, con-

traponiendo la legitimidad del Parlamento a la del presidente, en tonos "plebiscitarios" y adversativos, quien resulte electo y este vale para Tabaré Vázquez, tendrá que contar con apoyo de su gente y de otras bancadas.

En las claves peculiares de su democracia pluralista, el Uruguay ha sido gobernado en régimen de presidencialismo de compromiso y recorre la experiencia del presidencialismo de coalición, mediante una gestación de políticas y de reformas, necesariamente negociada, que exigen transacciones y márgenes consensuales anchos. Para ganar y para gobernar, el Frente Amplio -que ha pasado por muchas innovaciones- tendrá que estranearse también en estas sintonías. Es un desafío de enorme importancia para la izquierda y para el país.

Notas

¹ Director del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo.

² 50,4 por ciento de votos por SI, que pasan raspando la mayoría absoluta requerida por la Constitución, 46,2 por ciento de votos por NO, más 1,9 por ciento de votos en blanco (que cuentan también en contra), con 1,4 por ciento de votos anulados. En el voto afirmativo se alinea el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Nuevo Espacio y unos cuantos frentistas (incluyendo al general Seregni). En el NO se ubica el Frente Amplio y algunos sectores de los partidos tradicionales, con un margen importante de desobediencia.

³ En el promedio bimensual agosto-septiembre de Equipos Consultores, el Frente Amplio alcanza el 32 por ciento de las intenciones de voto a nivel nacional, habiendo oscilado este año entre el 29 por ciento y el 34 por ciento. Tabaré Vázquez recoge simpatías -de votantes y no votantes- por encima del 40 por ciento (con marcas anteriores que van del 33 al 40 por ciento). También recoge más del 33 al 40 por ciento de antipatía, siendo así la figura que genera mayor polarización.

⁴ La Democracia Cristiana y el PGP, que luego del asesinato de Zelnar Michelini se dirigió por Hugo Batalla. Posteriormente el Nuevo Espacio se desarma y queda al mando de Rafael Michelini. La Democracia Cristiana se vuelve a armar al Frente Amplio formando el Encuentro Progresista. Batalla es hoy vicepresidente de la República, como compañero de fórmula de Sanguinetti y se reintegra al Partido Colorado (del cual salió en 1962 junto a Zelnar Michelini), con un sector político que ha perdido mucho peso.

Una política democrática

Martín Plot

Las grandes fuerzas políticas argentinas nacieron como consecuencia de grandes experiencias históricas. El radicalismo nació vinculado a la lucha por la extensión de la vida republicana más allá de los estrechos límites en los que se vio circunscripta hasta comienzos de nuestro siglo. Luego, con el sufragio universal ya instalado, se consolidó como el partido mayoritario, expresando políticamente aquel anhelo de ampliación ciudadana. El peronismo nació, poco después, como la expresión política del movimiento de integración social que nuevos sectores protagonizaron durante las décadas del 40 y 50. Luego, tanto en el gobierno como durante los años de la proscripción, se consolidó como símbolo de las demandas sociales de los sectores populares.

Pero como la historia no es la gloriosa epopeya de un pueblo esencialmente idéntico ni el heroico andar de líderes clarividentes, desde fines de los años 60 en adelante se abrió un período de profunda conmoción social al que las principales fuerzas políticas no lograron darle una expresión republicana. Este proceso desató, como todos sabemos, lo que probablemente sea la experiencia más desgarradora que haya vivido la sociedad argentina en su historia moderna: el terrorismo de Estado. Sin embargo, durante el imperio del terror fueron apareciendo los primeros indicios de una cultura política novedosa. Esta cultura política incipiente adoptó las formas más diversas -movilizaciones de rechazo a las violaciones de los derechos humanos, demandas de justicia, expresiones culturales de resistencia a la cultura autoritaria, etcétera- y todas ellas se caracterizaron por introducir una clara discontinuidad con el pasado político: eran democráticas, no violentas y pluralistas. Esta cultura antiautoritaria fue tomando forma, hasta vivir un clima de efervescencia democrática inusitada durante los años de ocaso del terror y del nacimiento de la nueva democracia. En ese contexto, esta cultura utilizó alternativamente distintos canales de expresión política y social, pero fue finalmente aplacada por la reacción de los sectores autoritarios y la interrupción del proceso de ruptura simbólica e institucional con

el pasado que la sociedad argentina había emprendido.

El menemismo fue, evidentemente, la expresión política de esa reacción autoritaria y del intento de restauración, también simbólica e institucional, de aquella cultura antidemocrática de la arbitrariedad y la prepotencia que se estaba intentado desplazar. Pero, para decirlo un poco crudamente, creo que es posible que el Frepaso primero y la Alianza ahora hayan nacido para contribuir a dar forma política a aquella **cultura democrática, pluralista y posautoritaria** que vio interrumpido su camino de consolidación simbólica e institucional. Si la Alianza viene a introducir una novedad en la política argentina, esa novedad residirá precisamente en la difícil pero no imposible tarea de hacer de la cultura argentina una cultura fundamentalmente democrática y pluralista.

Las grandes fuerzas políticas, decíamos, han nacido como consecuencia de las principales experiencias históricas de nuestra sociedad. Este ser respuesta a una experiencia histórica, es decir, a las restricciones de la vida republicana, a la injusticia social o al terrorismo de Estado y la cultura autoritaria, hace que las grandes fuerzas políticas no estén destinadas solamente a terciar por intereses grupales, sino a proponer un modelo de nación que sea capaz de ser asumido con orgullo por gran parte de la sociedad. Pero para que esto tenga lugar hace falta



que las acciones desarrolladas por estas fuerzas políticas cobren, en los hechos, cierta forma. A la forma de expresión posible de esta cultura posautoritaria la llamaremos "política democrática".

También cruda, pero ahora además obviamente, diremos que una política democrática debe ser **política y democrática, Democrática**, porque debe reconocer la pluralidad del mundo en el que actúa y aceptar que sus propios actos sólo cobran validez a través del consentimiento ciudadano. Pero debe también ser claramente **política**, porque no debe limitarse a proponer sólo lo evidente y a decir solamente aquello que de antemano sabemos -o creemos saber- será aprobado por la opinión pública. Una política democrática debe preservar su carácter creador pero sin considerarse redentora: buscar la verdad esencial de las cosas humanas no es algo que esté a nuestro alcance y hacerlo no llevaría más que a la anulación mesiánica de la pluralidad propia de la sociedad.

Sé de las imperfecciones de las fuerzas que componen la Alianza y de las imperfecciones de la Alianza misma, pero así y todo no dejaría de ver con asombro que este proceso se apartara por completo de esta forma de política democrática. Me asombraría, básicamente, porque la Alianza ya nació un poco de una serie de acontecimientos que asumieron aquella forma. Debido a esto podríamos pensar que si las cosas no salen por completo mal -pero sabemos, de todos modos, que nada debe ser descartado-, podemos considerar que quizá nos encontremos dándole una vuelta de tuerca a la conformación de la esperada expresión política para aquella cultura antiautoritaria que no ha dejado de existir. Pero para que esto sea posible me parece que habría que recordar a todo el mundo, y hacerlo hasta el cansancio, nuestra pequeña observación: esa cultura antiautoritaria sólo podrá expresarse en la forma de una política democrática y, entiéndase bien, esta política no podrá sobrevivir si se la considera como un mero equilibrio entre ser un poco conservador, diciendo lo que la mayoría espera, y ser un poco mesiánico, imponiendo subrepticamente verdades propias que no nos animamos a hacer públicas. Más bien a la inversa, una política democrática no deberá ser en absoluto conservadora y despreciará por igual a las posturas mesiánicas, una política democrática será, finalmente, aquella que haga posible que la Argentina sea la sociedad democrática, pluralista y posautoritaria que, quizá, podamos ser.